

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 28º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-11040-2020
CARATULADO : URREA/CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL UNIÓN
ESPAÑOLA

Santiago, veintiuno de Septiembre de dos mil veintidós

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE::

Que a folio 1 con fecha 20 de julio de 2020 se presenta don **Rodrigo Herman Urrea Aguilera**, Abogado, domiciliado en calle Huérfanos N° 669, Oficina 409, Santiago y señala:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 680 N° 3 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, los artículos 1545, 1546, 2116, 2117, 2118 y 2158 N°3, todos del Código Civil y demás normas legales aplicables, interpone demanda de cobro de honorarios en contra de la **CORPORACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL UNIÓN ESPAÑOLA** (en adelante la "Corporación"), Corporación de derecho privado con personalidad jurídica, representada, en los términos dispuestos por el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, por su Presidente SR. JOSÉ ANTONIO MARINO CONDE, empresario, ambos con domicilio en La Macarena 34, departamento 203, comuna de Las Condes, Santiago.

Funda su demanda en que la demandada:

a) Adeuda y debe pagar al abogado tributario Rodrigo Urrea Aguilera honorarios por un monto de \$327.402.473.- (trescientos veintisiete millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos), que se desglosan en \$30.000.000.- (treinta millones de pesos) por un monto fijado y adeudado a todo evento, más el premio del 15% del ahorro y/o beneficios económicos obtenidos por la Corporación por o a causa de los juicios por cobro de obligaciones tributarias con la Tesorería General de la República, equivalentes a \$297.402.473.- (doscientos noventa y siete millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos). Ello, más los reajustes e intereses correspondientes devengados hasta la fecha de su pago efectivo.



Indica que la presente demanda de cobro de honorarios persigue que se condene a la Corporación a pagar al abogado tributario Rodrigo Urrea Aguilera, los honorarios profesionales que se adeudan por los servicios prestados a esta institución entre los años 2013 y 2019.

Lo anterior, con respecto a las obligaciones tributarias que existía entre la Corporación y la Tesorería General de la República (en adelante la Tesorería).

Esta asesoría, defensa y representación legal incluyó, principalmente:

- a) El desarrollo de una estrategia legal vinculada a la defensa tributaria, por la vía de derecho pertinente, de los Cobros Ejecutivos de Obligaciones Tributarias del Cuaderno Administrativo N° 705-2005 por \$182.151.000.-;
- b) el desarrollo de una estrategia legal vinculada a la defensa tributaria, por la vía de derecho pertinente, de los Cobros Ejecutivos de Obligaciones Tributarias del Cuaderno Administrativo N° 503-2008 por \$23.475.155.-;
- c) el desarrollo de una estrategia legal vinculada a la defensa tributaria, por la vía de derecho pertinente, de los Cobros Ejecutivos de Obligaciones Tributarias del Cuaderno Administrativo N° 1073-2010 por \$18.315.000.-; y
- d) el desarrollo de una estrategia legal vinculada a la defensa tributaria, por la vía de derecho pertinente, de los Cobros Ejecutivos de Obligaciones Tributarias del Cuaderno Administrativo N° 502-2009 por \$ 1.758.742.002.-

Dentro de la estructura de honorarios pactados, en un contrato firmado por ambas partes, se acordó cinco pagos fijos a todo evento y uno a título de éxito o premio del 15% de los ahorros y/o beneficios totales que la Corporación obtuviera con motivo del ahorro en la declaración de la prescripción de los impuestos, reajustes, intereses y multas cobrados por la Tesorería.

En efecto, luego de cuatro juicios complejos y largos, entre los años 2013 y 2019, y después de haber conseguido la declaración de prescripción de los cobros tributarios de los cuadernos administrativos N° 705-2005; N° 503-2008 y N°1073-2010, y estando en etapa de ser sentenciado el cuaderno administrativo 502-2009, unos abogados contratados por la nueva administración, por instrucciones de la Corporación, pero sin tener la facultad expresa en su Mandato Judicial para revocar poderes a otros abogados y sin comunicarle nada, procedieron a revocar su poder en ese expediente, debido a la importancia, se ahondará en este punto más adelante.



Es un hecho de público conocimiento, que la Corporación pasó por un periodo de crisis económica muy importante, llegando al punto de ser declarada en Quiebra en el año 2005, por lo que nadie quería asumir la dirección de esta institución, por lo cual su Presidente don Salvador Calera tuvo que hacerse cargo de todos los gastos de la Corporación a través de la Sociedad Inmobiliaria y Deportiva Unión Española S.A., pagando todos los cobros y deudas que se iban generando o apareciendo, para así cumplir con su mandato al frente de las distintas Instituciones de la Colectividad Española (Corporación; Inmobiliaria y Promotora Unión Española S.A.; Inmobiliaria Deportiva Unión Española S.A.).

En el mes de noviembre de 2018, debido a temas de salud decidió poner término a su mandato, procedió a enviar una carta a la colectividad española y citar a Asamblea Extraordinaria, en donde procedió a informar la situación financiera, judicial (causas tributarias) y demás de la Corporación, pero tuvo que renunciar ya que nadie quería asumir el cargo.

Debido a lo anterior, se tuvo que nombrar a otro presidente de reemplazo hasta que se llevaran a cabo las nuevas elecciones, las cuales se realizaron el mismo mes y asumió el nuevo directorio el 28 de noviembre de 2019, tomando control de la Corporación y en el mes de enero de 2019 de la Sociedad Inmobiliaria y Promotora Unión Española S.A.

Desgraciadamente, la nueva administración de la Corporación, al enterarse de la nulidad de todo lo obrado dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones y que ya no había duda de la prescripción de la acción de cobro alegada, procedió de mala fe a nombrar a otros abogados para que asumieran la defensa de la causa sin dar ninguna clase de aviso. Cuando se le notificó la sentencia y se les indico la deuda por todas las gestiones, se negó a pagar los honorarios pactados, que estaban pendientes y el premio pactado con dicha Institución.

Lo anterior, no obstante, los millones de pesos que se ahorraron gracias a la asesoría legal, teniendo pleno conocimiento del tiempo del contrato y que ya se habían realizado los primeros pagos pactados. Pero no sólo eso, la actual administración de la Corporación, encabezada por don José Antonio Marino Conde, ha llegado al extremo de desconocer la existencia misma de la asesoría legal prestada como también los juicios que se ganaron.

En cualquier caso, es inaceptable moral y jurídicamente que esta nueva administración de la Corporación lo perjudique al no pagarle los honorarios profesionales por los servicios que se prestaron y que le significaron un ahorro millonario, más de \$1.900 millones de pesos, a la demandada, beneficios que,



evidentemente, están siendo aprovechados en la actualidad, ya que se jactan de “haber ganado todos los juicios y del ahorro logrado por ellos ante sus socios, que pagan las cuotas del club”.

Dicho lo anterior, la presente demanda que se he visto forzado a presentar, persigue que la Corporación pague al Abogado Tributario Rodrigo Urrea Aguilera los honorarios fijos y por éxitos y/o premios pactados que le adeuda; y que injustificadamente se niega a pagar desconociendo incluso los servicios prestados y los juicios ganados por esta parte, todo lo cual fue acordado en un contrato de honorarios firmado entre las partes; cuyas gestiones encargadas eran la asesoría legal, representación y defensa tributaria de la Corporación en los cuatro juicios por cobros de obligaciones tributarias con la Tesorería General de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que en el año 2008 la Corporación vendió el 99% de sus acciones de la Sociedad Deportiva Unión Española S.A.D.P. (en adelante Unión Española) al Colegio Internacional Sek, entregando a la vez el Estadio Santa Laura en Usufructo con opción de compra, en la cual se estableció un precio por el Estadio Santa Laura de 175.000 Unidades de Fomento (\$5.000 millones aproximadamente). Quedando de esta manera el Colegio Internacional Sek como controlador y administrador de la Unión Española, su estadio y Club Deportivo, en dichos contratos se pactó que cualquier gasto o cobro anterior al año 2008, sería pagado por la Unión Española, pero que su vez, sería descontado del precio de compra del estadio, cuando se hiciera efectiva la opción; todo lo anterior, se realizó debido a que la Corporación estaba muy endeudada y se encontraba en un proceso de quiebra; en esta operación quedaron obligadas solidariamente a estos contratos la Corporación y la Sociedad Inmobiliaria y Promotora Unión Española S.A. (actual dueña del Estadio Santa Laura).

Posteriormente, hubo varios juicios laborales y tributarios, anteriores al año 2008, que fueron defendidos por Unión Española, pero todos se perdieron, generando grandes pagos (700 millones aproximadamente), que después serán rebajados del precio de compra, como se comentó antes; y cuando la Tesorería inició los cobros de las obligaciones tributarias adeudadas, cercanas a los \$2.000 millones, la Unión Española, sugirió a través de sus abogados que se llegue a un convenio de pago cercano a los \$ 1.500 millones, ya que era imposible ganar esos juicios; teniendo presente que para ellos no significaba ningún perjuicio, ya que después, rebajarían dicha cantidad del precio de compra.



Frente a esta situación, la Corporación, a través de su presidente don Salvador Calera, decidió consultar a otros abogados tributaristas, entre los cuales estaba, ante lo cual se realizó un estudio y, análisis legal de la situación, se emitieron informes y se indicó que había nulidad de todo lo obrado por falta de notificación válida y, además, que a su criterio estaban todos los cobros prescritos.

En resumen, si se hubiese aceptado o mantenido la defensa que se llevaba antes, a lo menos la Corporación hubiese tenido que rebajar del precio de venta de su Estadio, el monto de \$700 millones, más los \$1.500 millones por los que se hubiese llegado a acuerdo, interrumpiendo la prescripción de todos los otros cuadernos y cobros por un Convenio de pago con la Tesorería, es decir, más de \$2.200 millones menos del precio del Estadio, tal como se informó por Unión Española en minuta de mayo de 2017.

Actualmente, los nuevos directores de la Corporación decidieron desconocer cualquier gestión realizada por su estudio jurídico y un contrato de servicios firmado en el año 2013, para defender todos los juicios que Tesorería estaba cobrando, argumentando que esta gestión no fue aprobada en ninguna asamblea ni menos por ellos, lo cual le parece realmente una vergüenza para el nombre de esa institución. Es más, si no hubieran defendido a la Corporación, la Sociedad Deportiva Unión Española S.A.D.P. hubiese negociado con la Tesorería un acuerdo de pago que les hubiese costado cerca de \$1.500.000.000.- (mil quinientos millones de pesos) más los honorarios de sus abogados, tal como lo expresaron “indicando que era la mejor opción”; desde luego, dichos montos los hubiesen rebajado del precio de compra del Estadio Santa Laura, tal como lo indicaron sus representantes en varias reuniones en la cual estaban presente otros directores de la institución y en minuta de deudas de mayo del año 2017, en la cual incluían estas deudas tributarias para ser descontadas del precio de compra.

Respecto de los juicios ganados por el abogado demandante ante la Tesorería y el ahorro real que obtuvo la Corporación por estas gestiones. En esta parte de la demanda sostiene que con fecha 30 de octubre de 2013 se firma un contrato de prestación de servicios entre la Corporación Deportiva y Social Unión Española, representada legalmente por don Salvador Calera González y su parte, en donde se establecen los cuatro juicios tributarios que se deben defender contra la Tesorería General de la República, los honorarios, la forma, plazos en que se pagaran y el tiempo que duraran dichas gestiones, además de otras cláusulas.



Se le otorgó Mandato Judicial para representar a la Corporación y con este poder se hice parte en los tres primeros juicios que estaban notificados a esa fecha, ya que el cuarto de ellos aún no había sido notificado el cobro, en los cuales se alegó la nulidad de todo lo obrado por falta de notificación válida y en subsidio la excepción de prescripción de la de acción cobro de las obligaciones tributarias por parte de Tesorería, debido a que habían transcurrido más de 10 años sin que se ejerciera dicha acción.

Juicios ganados por Abogado Tributario Rodrigo Urrea Aguilera contra Tesorería:

a) Cuaderno Administrativo N° 705-2005 por \$182.151.000.- . Notificación: 21-08-2009. Presentación: Nulidad y Excepción Prescripción 13-12-2013. . Estado: Acogida excepción prescripción, 18-06-2014. . Monto total: \$182.151.000.b) Cuaderno Administrativo N° 503-2008 por \$ 23.475.155.-. Notificación: 26-07-2013. Presentación: Nulidad y Excepción Prescripción 13-12-2013. . Estado: Acogida excepción prescripción, 23-09-2015/C-8250-2015. 17° J.C.S. . Monto total: \$23.475.155.- c) Cuaderno Administrativo N° 1073-2010 por \$ 18.315.000.-.Notificación: 26-07-2013. Presentación: Nulidad y Excepción Prescripción 13-12-2013. . Estado: Acogida excepción prescripción, 18-06-2014. . Monto total: \$18.315.000.- d) Cuaderno Administrativo N° 502-2009 por \$ 1.758.742.002.-. Notificación: 11-10-2017. Presentación: Nulidad y Excepción de Prescripción 17-10-2017. Previo proveer: Acompáñese Mandato actualizado 06-11-2017. Cumple lo ordenado: 13-11-2017. Da curso a escrito: 16-11-2017. Acogida a tramitación: 16-11-2017. Oficio al SII: 04-12-2017. Oficio a Tesorería: 04-01-2018. Resolución Tesorería: Se rechazan Excepciones, 26-07-2018. 1ª Demanda Juzgados Civiles: 23-08-2018/C-26302-2018. 10° J.C.S. Rechazo demanda: 31-08-2018.2ª Demanda Juzgados Civiles: 03-09-2018/C-27402-2018 10° J.C.S. Rechazo demanda: 06-12-2018. Nulidad de todo lo obrado: 19-11-2018, Rol Corte 8669-2018. Nueva Notificación: 18-03- 2019. Presentación: Excepción Prescripción 26-03-2019, está en expediente. Revocación de poder: 28-03-2019, sin aviso ni notificación. Presentación nuevos abogados: Excepción Prescripción 29-03-2019. Estado: Acogida excepción prescripción, 19-08-2019, a pesar de la revocación de poder, Tesorería igual ordeno que se notificara la sentencia a esta parte, reconociendo el hecho de que siempre habían llevado todo el juicio y los juicios anteriores, y que habían presentado la excepción de prescripción antes, pero les habían revocado el poder al final cuando todo ya estaba definido para que se declarara la prescripción. Monto total: \$ 1.758.742.002.



En el resumen de cada juicio, se puede ver que Tesorería rechazó la acción de nulidad, pero acogió la prescripción en casi todos los cobros el año 2014, excepto los del cuaderno 503- 2008, los cuales según establece la ley fueron remitidos a los Juzgados Civiles a fin que determinaran si existía prescripción, en la causa Rol C-8250-2015 del 17º Juzgado Civil de Santiago, el cual después de un análisis exhaustivo, en el año 2015 declaró en una muy completa y detallada sentencia, que todos los cobros estaban prescritos de ese expediente; misma situación sucedió con el cuaderno 502-2009, pero cuando fueron remitidos a los juzgados civiles, primero en la causa Rol C-26302-2018 del 10º Juzgado Civil de Santiago, no se cumplió con lo ordenado por el Tribunal y se decretó “tenerla por no presentada”; la segunda vez, Tesorería, en la causa Rol C-27402-2018 del 10º Juzgado Civil de Santiago, volvió a no cumplir con lo ordenado, en cuanto a acompañar físicamente el expediente y el Tribunal volvió a tenerla por no presentada. A esa altura, ya se había decretado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, por lo que no se continuó en sede civil, ya que no había discusión alguna de que todo estaba prescrito, tal como lo señala en la misma sentencia la propia Tesorería.

En cuanto, a al cuaderno administrativo 502-2009, este fue recién notificado el 11 de octubre del año 2017, asumiendo nuevamente la defensa, tal como está establecido en el contrato, para lo cual se les otorgó un Mandato Judicial actualizado por requerimiento de la Tesorería, validando que el contrato de honorarios firmado por las partes, seguía plenamente vigente.

En esta oportunidad Tesorería procedió a embargar los dineros provenientes del Canal del futbol a la Sociedad Deportiva Unión Española S.A.D.P. en su calidad de continuadora legal de la Corporación, frente a lo cual, el 17 de octubre de 2017, volvió a representar a la Corporación y a alegar la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento y en subsidio la excepción de prescripción, ya que los juicios ganados antes, avalaban su teoría jurídica del caso; pero esta vez como había un embargo de por medio que ocasionaba un perjuicio directo y real a la Sociedad Deportiva Unión Española, ellos igual se hicieron parte y siguieron su teoría jurídica, alegando la nulidad de todo lo obrado y la prescripción, a lo que la Tesorería resolvió rechazar todo lo presentado y dejarlos fuera del juicio pero sin levantar el embargo y prosiguió con el procedimiento de apremio y la excepción de prescripción presentada por su parte, así que se presentó un Recurso de reposición con Apelación en subsidio.



Ante esta situación Unión Española, recurrió a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, la cual falló el 19 de noviembre de 2018, que nunca se había notificado válidamente ni a la Corporación ni a la Unión Española, ordenando que se deje sin efecto todo lo obrado hasta las fojas número 7, teniendo por notificada a la ejecutada en ese acto y ordenando que se notifique el cúmplase de la sentencia por el tribunal A Quo.

Paralelamente, la Tesorería había continuado con el procedimiento de cobro en el cuaderno de apremio y en los cuadernos de excepciones que se estaban tramitando, a lo cual resolvió que no había nulidad por existir notificación válida y que los cobros no estaban prescritos; ante esta resolución se le insistió a Tesorería que enviase los antecedentes a los Juzgados Civiles para discutir la prescripción, tal cual lo establece el procedimiento, ante los requerimientos Tesorería presentó la demanda, dos veces, pero sin formalizarla o acompañar los cuadernos administrativos cuando era apercibida por el tribunal, por lo que fueron declaradas por no presentadas.

Cuando se le hizo presente esta situación en Tesorería, se les informó que la Ilustrísima Corte de Apelaciones había fallado a favor y que se había declarado la nulidad de todo lo obrado porque no existía notificación válida de las partes; por lo que no había nada que revisar ni discutir y que se declarararía la prescripción de todos los cobros, así que le notificarían nuevamente para que presentaran las excepciones de nuevo.

Por lo cual el día 26 de marzo de 2019, después que se les notificó el 18 de marzo del mismo año, tal como les habían informado en la Tesorería, procedieron a interponer de nuevo las Excepciones de Prescripción, sabiendo que serían acogidas, tal como lo expresa claramente la Sentencia de Tesorería de fecha 19 de agosto de 2019, en sus considerandos 9 y 10:

“9.- Que, como consecuencia de lo antedicho, desde la generación de la demanda, con su correspondiente Mandamiento de Ejecución y Embargo, de fecha 11 de marzo de 2009, hasta la notificación legal de ésta y su requerimiento de pago, mediante diligencia de 18 de marzo de 2019, se ha cumplido el plazo establecido por el legislador para perseguir el pago de los impuestos, intereses y recargos legales de autos. En conformidad a lo anterior, se entiende que la notificación de la demanda y requerimiento judicial de pago se practicó en una fecha donde ya habían transcurrido los tres años requeridos para que opere la prescripción extintiva, consecuentemente, al no haber estado válidamente notificada la ejecutada, no ha operado alguna de las causales de interrupción del



plazo de prescripción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2503 del Código Civil”.

“10. Que, en virtud de estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo presente lo dispuesto además en los artículos 1567, 2492 y 2514 del Código Civil; artículos 200 y 201 del Código Tributario y demás disposiciones aplicables del Código de procedimiento Civil, deberá ser acogida la excepción de prescripción opuesta, como se dirá.”

Frente a esta noticia de la Nulidad, el nuevo Directorio de la Corporación elegido el 26 de noviembre de 2018, ya que ese mismo mes había renunciado el presidente anterior don Salvador Calera, y en su afán de atacar y desmerecer cualquier gestión realizada por la Directiva anterior, desconoció el contrato de prestación de servicios y sin dar ningún tipo de aviso, y al ver la posibilidad de arrogarse el éxito de haber logrado ganar el juicio tan importante y tan comentado en la colectividad española y así evitar el pago de los honorarios, indicando que eran personales y debían ser asumidos por la Directiva anterior, aprovechó la ocasión para revocar su poder en la causa y designar otros abogados, que sólo siguieron, casi al pie de la letra, todo lo que ya estaba hecho y así poder decir que ellos habían ganado el juicio y que esta su parte jamás había realizado ninguna gestión en ningún juicio y que nunca habían tenido poder en la causa y que para nombrarlos no se había realizado ninguna asamblea de socios, ya que el presidente no tenía facultades para nombrar ni contratar abogados.

La nueva administración desconoció la cláusula Séptima del contrato de honorarios, donde se establecía la obligación de las partes de dar un aviso de a lo menos 30 días de anticipación para poner término al mandato, lo cual debía ser realizado por aviso escrito o correo electrónico; más aún, teniendo sus teléfonos, correos electrónicos y dirección (todo aparece al pie de cada hoja de las demandas y escritos presentados); la nueva administración procedió a revocar el poder el día 28 de marzo de 2019 y a designar nuevos abogados, quienes presentaron la Excepción de prescripción el día 29 del mismo mes, solicitando que no se considerara la presentación realizada antes.

Hace presente que el nuevo Directorio asumió sus funciones en pleno desde el 28 de noviembre de 2018, por lo que perfectamente pudieron haber revocado el poder antes y asumir la representación y defensa, pero como estaba la incertidumbre de que se podía perder el juicio, no lo hicieron; y sólo cuando vieron que se había conseguido lo más difícil y que sólo había que presentar un



escrito de excepción de prescripción y esperar la sentencia que las acogiera, ya que no presentaron ningún medio de prueba y todos los oficios, lo pide Tesorería.

Sostiene que al haber llevado todo el juicio de este cuaderno 502-2009 desde el año 2017, y con la experiencia de haber llevado y ganado los juicios anteriores, estaba esperando que se dictara la sentencia, ya que todos los oficios que debe incorporar la Tesorería, ya estaban en los cuadernos y sólo había que reiterarlos como parte del procedimiento interno, pero en cuanto a la prescripción no había nada que aclarar, y debido a que el funcionario estuvo con permiso, recién el 29 de agosto de 2019, les notificaron la sentencia que acogía la prescripción de todos los cobros del cuaderno administrativo 502-2009, tal como había sucedido en todos los juicios anteriores que habían ganado; haciendo presente que la sentencia de Tesorería se basa y reconoce todos los argumentos expuestos en escritos de fecha 17 octubre de 2017 y 26 de marzo de 2019.

Fue una gran sorpresa en ese momento percatarse que aparecían otros abogados como los que habían presentado las alegaciones de prescripción por la Corporación, pensando que era un error, ya que como todas las resoluciones y sentencias de este y todos los juicios anteriores se habían notificado siempre en su domicilio laboral y no a ellos, se dirigió a Tesorería a indicar ese error; pero recién en ese momento se enteró que le habían revocado el poder y que se había solicitado que se dejara por no presentado su escrito de excepciones y se le diera curso al de ellos, pero quedando todo respaldado en el cuaderno de excepciones.

Todo lo anterior está reflejado fielmente en los cuadernos administrativos de apremio y de las excepciones tramitadas del expediente 502-2009, tal como acompaña, sólo falta la parte final, donde se presentó de nuevo la excepción de prescripción y se le revocó el poder; pero lamentablemente, no se le otorgaron copias por ya no tener poder en la causa, pero que se solicita desde ya, que se oficie al servicio de Tesorería a fin de que remitan todos los cuadernos.

En resumen, los abogados nuevos presentaron un escrito utilizando los argumentos jurídicos de él, con los que había ganado todos los juicios anteriores y se adjudicaron todos los méritos al aprovecharse de tener todo el trabajo hecho; indicando que nunca se había hecho nada por su parte, mientras que lleva defendiendo a la Corporación en varios juicios contra la Tesorería General de la República desde el año 2013, sin perder ninguno, ya que a diferencia de ellos, es especialista en materia tributaria y por eso se le contrató.

RECHAZO DEL PAGO DE LOS HONORARIOS PACTADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN.



Frente a tal situación de injusticia y a la falta de ética de los colegas, ya que habían realizado todo el trabajo por años (2013 al 2019) y que se había ocupado el mismo argumento legal; se comunicó con el presidente saliente don Salvador Calera para saber qué había sucedido y porque motivo se le había revocado el poder en la causa, a lo cual él también se sorprendió del actuar del nuevo Directorio, asegurándole que estuviese tranquilo ya que la gente de la comunidad española era gente de palabra y que responderían con lo pactado.

El señor Calera, envió un correo en el cual lo agregó, indicándole a un director de la Corporación que él necesitaba conversar con ellos y que era el abogado que había ganado todos los juicios contra Tesorería.

Se contactó con él don Manuel Álvarez, Tesorero de la Corporación, a quien le informó, a través de correo electrónico, lo sucedido, que se adeudaban sus honorarios y le indicó que lo verían. Días después le enviaron un correo con la respuesta de otro estudio jurídico, quienes indicaban que no había realizado nada en el juicio y que “me quería pasar de listo”, siendo que, como vera, si no hubiesen alegado dentro de plazo la nulidad y las excepciones desde el primer juicio el año 2013, si no hubiese realizado todas las gestiones que acompaña a esta presentación, la Corporación hubiese tenido que pagar sólo por el último juicio cerca de \$1.800.000.000.- de pesos, sin contar con todo el ahorro anterior.

Posteriormente, se le envió otro correo electrónico con una carta formal, desconociendo el contrato firmado, los juicios anteriores e indicando que no se había realizado ninguna gestión y que nunca había tenido poder en las causas y por consiguiente que no correspondía pagar ningún honorario. Carta respuesta al cobro de honorarios enviada por la Corporación.

En la carta formal de respuesta, enviada por la Corporación se puede analizar sin lugar a dudas, la mala fe con que está actuando la nueva administración, al ocupar mentiras insostenibles para excusarse de cumplir con su obligación pactada en el contrato de honorarios y de las cuales tenían pleno conocimiento, a continuación, detalla un extracto del cuerpo de la carta:

“1. Nuestra Corporación desconoce cualquier tipo de acuerdo de honorarios en esos términos con su persona, así como toda gestión por Ud. realizada. Esta nueva Directiva, apenas asumió su rol, designó a abogados de su confianza, revocando Mandatos Judiciales previos (incluyendo el suyo), por lo que toda actuación reciente es imputable únicamente a la labor de los profesionales contratados por la institución.



2. No existe en los antecedentes de la Corporación ningún trato formal, aprobado por Junta de Accionistas o en Junta de Directorio, que dé cuenta de lo expuesto en su correo, por lo que debe ser íntegramente rechazado por esta Directiva. Así, no corresponde a este Directorio, ni a la Corporación, pago alguno por compromisos de ninguna especie, cuyo origen haya sido externo a la institución o de carácter personal con alguno de sus antiguos integrantes.

3. En relación a las letras d), e) y f) que refiere, es de conocimiento de esta Directiva que Ud. no tuvo participación en los hitos allí referidos, constando así en el expediente tributario tal situación, cuya copia se encuentra en manos de esta Corporación. En concreto, constan exclusivamente actuaciones de los abogados contratados por la nueva Directiva, con los que se pactaron los honorarios pertinentes por sus gestiones, efectivamente realizadas. A mayor abundamiento, la verificación de dichos hitos ocurrió mientras Ud. ya no representaba a la Corporación, ni judicial ni extrajudicialmente, por lo que malamente se pueden deber honorarios por dichos conceptos alegados.”

En el punto 1.claramente, se puede ver las mentiras y excusas para evitar el pago de los honorarios, ya que indican que apenas asumieron el rol como directiva, nombraron a abogados de su confianza y ellos asumieron el 28 de noviembre de 2018 y le revocaron el poder el 28 de marzo de 2019, es decir, cuatro meses después y sólo cuando se había decretado la nulidad de la notificación.

En el punto 2. argumentan que no se había aprobado su gestión ni su mandato judicial, por alguna junta de accionistas, siendo que es Asamblea de socios, o de directorio o que el encargo de defender los intereses de la Corporación es de carácter personal con alguno de sus antiguos integrantes, es decir, el ahorro y beneficio no existió para la Corporación, desconociendo sus propios estatutos sociales, en los que la facultad de representar a la Corporación, tanto judicial como extrajudicialmente está expresamente radicada en el Presidente del Directorio:

Facultades del Presidente según Estatutos Sociales de la Corporación: “TITULO V. DEL DIRECTORIO. ARTÍCULO TRIGÉSIMO:

El Directorio de la Corporación deberá... El presidente del Directorio lo será también de la Corporación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos señalen.”



“TITULO VI. DEL PRESIDENTE. ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Corresponde especialmente al presidente del Club Deportivo:

a.- Representar judicial y extrajudicialmente a la Corporación, con las facultades establecidas en ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil.

h.- Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar a la Corporación”.

Además, dice, que se establece que los estatutos, y por ende las facultades del presidente del Directorio, sólo pueden ser modificadas en una Asamblea Extraordinaria de Socios, incluso, estableciendo un quorum de 2/3 de los votos a favor. La última modificación de los Estatutos Sociales de la Corporación se realizó el 17 de junio de 1998 en una Asamblea Extraordinaria de Socios Club Deportivo Unión Española y se mantuvo vigentes todas las facultades del presidente que se habían otorgado en la Asamblea de constitución de la Corporación.

Exigencias para modificar los Estatutos Sociales de la Corporación: “TITULO IV. ASAMBLEAS GENERALES. ARTÍCULO DECIMO NOVENO:

Corresponde exclusivamente a la Asamblea General Extraordinaria tratar de las siguientes materias:

a.- De la reforma de los Estatutos de la Corporación.”

“ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Los acuerdos... Para modificar los estatutos de la Corporación se requiere el voto conforme de los dos tercios de los socios activos presentes.”

“TITULO IX. DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. ARTÍCULO CUADRAGESIMO TERCERO:

La Corporación podrá modificar sus estatutos por acuerdo de una Asamblea Extraordinaria, adoptado por los dos tercios de los socios activos y honorarios presentes. La Asamblea deberá celebrarse con la asistencia de un Notario Público, el que certificará el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades que establecen estos estatutos para su reforma.”.

En el punto 3, se desconoce la cláusula Tercera en sus letras d), e) y f) del contrato de honorarios que establece lo siguiente:

“TERCERO: Los honorarios se pagarán de acuerdo con la labor realizada, de la siguiente forma: en seis pagos, los cuales se harán de las siguientes formas: a)



Primer Pago, al inicio de la gestión de los cuadernos administrativos (705-2005 / 503- 2008 / 1073-2010), por la suma de \$ 5.000.000.- (PAGADO Boleta honorarios N°125) b) Segundo pago, será al término de la gestión de los cuadernos administrativos (705-2005 / 503-2008/1073-2010), por la suma de \$ 5.000.000.- (PAGADO Boleta honorarios N°242) c) Tercer pago, será al momento de la notificación de cobro de la obligación tributaria del cuaderno administrativo Rol 502-2009, por la suma de \$ 5.000.000.- (PAGADO Boleta honorarios N°546) d) Cuarto pago, será al momento notificación de que se le dio curso a la excepción de prescripción de las obligaciones tributarias del cuaderno administrativo Rol 502-2009, por la suma de \$5.000.000.- (ADEUDADO) e) Quinto pago, será al momento notificación de la Sentencia que de término a las gestiones del cuaderno administrativo Rol 502-2009, por la suma de \$ 25.000.000.- (ADEUDADO) f) Sexto pago, será un premio correspondiente a un porcentaje del ahorro que obtenga o de lo que deje de pagar la Corporación, al término de todos los cobros de las obligaciones tributarias en los cuadernos administrativos Rol 705-2005 / 503-2008 / 1073- 2010 / 502-2009, dicho porcentaje se calculará de la siguiente manera: Contra sentencia firme que declare la prescripción de todos los cobros de las obligaciones tributarias, el premio será de 15% del ahorro. (ADEUDADO). Contra sentencia firme que declare la prescripción de menos del 50% de los cobros de las obligaciones tributarias, el premio será de 10% del ahorro.”.

Como se puede ver a simple vista en la carta enviada, se desconocen los pagos adeudados, pero se aceptan, sin cuestionamiento alguno, los pagos ya realizados de las letras a), b) y c).

En cuanto a las gestiones, indican que tienen conocimiento que no tuvo ninguna participación en los hitos allí referidos y mintiendo nuevamente agregan que esta consta en el expediente tributario, es más, indican que solo existen actuaciones de sus abogados y que a ellos se le pagaron los honorarios por las gestiones, efectivamente realizadas.

Expresa que en las copias del Cuaderno Administrativo de Apremio y de Excepciones N° 502-2009 que acompaña a esta presentación, se realizaron todas las gestiones necesarias para ganar el juicio desde el año 2017 hasta el año 2019 en esta causa; y por los escritos de nulidad, prescripción y sentencias de los juicios anteriores (2013 al 2015), que también acompaña, se puede apreciar sin lugar a dudas que todos los juicios fueron defendidos por su parte, incluso, como en Tesorería tenían pleno conocimiento de que siempre había defendido a la Corporación, se le notificó en su domicilio laboral, la sentencia de este juicio, a pesar de que se les había revocado el poder al final, sin comunicarle ni avisarle



por parte de la nueva administración de la Corporación y sin tener crítica ni cuestionamiento alguno a su trabajo, ya que como ha mencionado antes, se han ganado todos los juicios encargados.

Aún después de desconocer todo lo realizado por su parte, al final se contradicen en sus mentiras e indican “A mayor abundamiento, la verificación de dichos hitos ocurrió mientras Ud. ya no representaba a la Corporación, ni judicial ni extrajudicialmente...”, es decir, después se reconoce que, si hubo gestiones, pero no tenía poder de ningún tipo, siendo que al momento de interponer la nulidad y la excepción de prescripción el año 2017, se le otorgo un nuevo mandato Judicial para defender los intereses de la Corporación, ya que la vigencia del Mandato anterior tenía más de dos años (era del 2013).

Llega a tal punto el desconocimiento, su actuar con mala fe y falsedad de sus dichos al indicar que los actos realizados, se hicieron cuando ya no se representaba a la Corporación, que olvidan que el Procedimiento de Cobro Ejecutivo de las Obligaciones Tributarias de Dinero, está claramente establecido en el Título V, Art. 168 y siguientes del Código Tributario, el cual indica claramente, cómo se inicia el procedimiento de cobro, en este caso el año 2017 y cuando termina; que es con la Sentencia de un Tribunal Ordinario que conozca y falle las excepciones interpuestas ante la Tesorería, por lo que el mandato judicial tiene plena validez para representar a la Corporación, incluso hasta el término del último recurso que falle la Excelentísima Corte Suprema y no se acaba con la resolución que acoja (parcialmente) o rechace la excepciones dictada por la Tesorería, como al parecer entienden, en su ignorancia en materia tributaria, los asesores de la nueva administración de la Corporación, al pensar que el mandato judicial se extinguió con la resolución de junio de 2018 en que la Tesorería no acogió la excepciones y procedió a enviar los antecedentes a los tribunales ordinarios, tal como explica en esta presentación.

Así lo establece el artículo 179 del Código Tributario, en cuanto a que, si transcorre el plazo para oponerse a la ejecución, habiéndose opuesto o no, se debe enviar al Abogado Provincial el expediente, quien mediante resolución fundada deberá pronunciarse acerca de la oposición, la hubiese o no acogido y se notificará por cédula lo resuelto.

Si no fueron acogidas las excepciones opuestas, el Abogado Provincial debe presentar el expediente al Tribunal Ordinario competente, con un escrito solicitando al Tribunal que se pronuncie sobre las excepciones y si no se hubiesen



opuestos excepciones, se solicitará el retiro de especies y demás medidas de realización que correspondan.

El artículo 180 del Código Tributario, indica que, “El expediente y el escrito a que se refiere el artículo anterior se presentarán ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía del departamento correspondiente al domicilio del demandado al momento de practicársele el requerimiento de pago.”

CONTRATO HONORARIOS FIRMADO POR LAS PARTES:

Contrato Prestación de Servicios a Honorarios

a) Se firmó un contrato de honorarios con fecha 30 de octubre de 2013, entre don Salvador Calera González, presidente del Directorio, en representación de la Corporación Club Deportivo y Social Unión Española, RUT 81.690.700-4 y Rodrigo Urrea Aguilera, Abogado, Magíster en Dirección y Gestión Tributaria.

b) La Cláusula primera, establece los servicios que el sr. Urrea debe prestar a la Corporación, en su calidad de Abogado especialista en materia tributaria y se establece expresamente cuales son los cuadernos administrativos que debe defender ante la Tesorería General de la República.

c) La Cláusula segunda, establece la calidad de trabajador que tendrá frente a la Corporación.

d) La Cláusula tercera, establece los honorarios, indica que se pagará una cantidad fija de \$45.000.000.- en cinco cuotas que se devengarían en distintos momentos de los juicios y un premio del 15% por el porcentaje de ahorro o de lo que deje de pagar la Corporación al término de todos los juicios de cobros de las obligaciones tributarias de los cuadernos administrativos 705-2005/ 503-2008/ 1073-20107 y 502-2009.

e) La Cláusula cuarta, establece que el abogado sólo tendrá derecho a la remuneración pactada en la cláusula tercera.

f) La Cláusula quinta, establece que los gastos del contrato serán de cargo de la Corporación.

g) La Cláusula sexta, establece la solidaridad.

h) La Cláusula séptima, establece la duración del contrato por el tiempo que demore la gestión encargada e impone la obligación de dar aviso de término del contrato anticipadamente, a través de documento escrito o correo electrónico con



a lo menos 30 días de anticipación, bajo cláusula penal de pagar todos los honorarios pactados, tanto fijos como premios.

i) La Cláusula octava, establece la competencia.

De la cláusula Tercera, sólo se alcanzó a pagar las primeras 3 etapas, es decir, las letras a), b) y c), quedando adeudado las letras d) y e), que son los montos que se cobran en esta demanda.

Las partes para acordar la remuneración pactada tuvieron presente las siguientes consideraciones, las que se cumplieron plenamente para determinar los mismos:

I.- La importancia de los servicios; claramente, era una causa muy importante para la Corporación, ya que había mucho en riesgo, incluso, podría llegar a la pérdida del Estadio Santa Laura.

II.- La cuantía del asunto; este punto también fue determinante, debido al alto monto por impuestos adeudados que estaba cobrando Tesorería, cercano a los \$2.000 millones de pesos, entre los 4 juicios.

III.- El éxito obtenido y su trascendencia; desde un principio, se pensó por varios estudios jurídicos que era mejor negociar porque era muy difícil o riesgoso que se declarara la prescripción de todos los cobros y por este motivo se estableció el premio por todo lo que se rebajara o dejara de pagar la Corporación y como ya está dicho en reiteradas oportunidades conseguimos obtener sentencia favorable en los 4 juicios, aunque nos hayan revocado el poder al final del cuarto, ya que toda la gestión, estrategia jurídica y perseverancia fue realizada por esta parte.

IV.- La novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas; tal como se mencionó antes, existía una gran y evidente dificultad en los cuatro juicios tributarios, ya que sólo se ofrecía por otros estudios jurídicos llegar a un acuerdo con Tesorería para que rebajara intereses y multas porque era muy complejo conseguir la declaración de prescripción en materia tributaria.

V.- La experiencia, la reputación y la especialidad de los profesionales que han intervenido; como se ha indicado en varias partes de esta demanda, somos especialistas en Derecho Tributario, con estudios y especializaciones, Magister y Diplomados en el área, con más de 10 años de experiencia y con dedicación exclusiva en estas materias.

VI.- La capacidad económica del cliente; tal como se ha indicado, la Corporación en una institución de la colectividad española que cuenta con el control de otras



sociedades, que manejan recursos y son dueñas del Estadio Santa Laura, y desde que asumió la nueva administración han contratado los servicios de estudios jurídicos para iniciar varias demandas, que revelan una solvencia económica bastante cómoda.

VII.- La posibilidad de resultar el abogado impedido de intervenir en otros asuntos o de desavenirse con otros clientes o con terceros; asumir estas causas, tuvo el costo de tener muchas desavenencias con la Unión Española S.A.D.P., actualmente, administrada por el Colegio Internacional SEK, con personas de la colectividad española que tenían otros intereses en estos juicios y que le costó que le quitaran el poder en estas causas.

VIII.- Si los servicios profesionales son aislados, fijos o constantes; serían aislados, pero desde que fueron contratados los servicios legales, fueron pensados en cuatro juicios largos y de varios años, ya que podían llegar hasta la Corte Suprema, si no eran bien argumentados y defendidos, ya que Tesorería si tenía una posibilidad de ganar llegaría hasta las últimas instancias.

IX.- La responsabilidad que se derive para el abogado de la atención del asunto; tenía una gran responsabilidad, ya que estaba su prestigio de por medio y las consecuencias de perder estos juicios, serían muy graves para la Corporación, por lo que demandaban una atención especial y casi exclusiva el asunto.

X.- El tiempo empleado en el patrocinio; bueno el tiempo que se emplearía, sería bastante, al punto que se tuvo que contratar a otros colegas para que llevaran otras causas y enfocarme en cumplir con todas las gestiones personalmente.

XI.- El grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto, como se demostrará en reiterados correos electrónicos con el presidente de la Corporación de ese momento, se tuvo que emitir varios informes y analizar muchas aristas jurídicas para tener plena certeza del camino a seguir y en cuanto al desarrollo, como se ve en las sentencias de los juicios, se estuvo presente personalmente en todos los juicios.

XII.- Si el abogado solamente patrocinó al cliente o si también lo sirvió como mandatario. Acá no sólo se patrocinó las cuatro causas, sino que también se tuvo que defender los intereses frente a la Unión Española S.A.D.P., ya que se debía tratar con ellos para coordinar y evitar realizar presentaciones contrarias y/o solicitarles que no intervinieran en los juicios, tal como sucedió en los tres primeros.



En la Cláusula séptima, se establece la obligación de dar aviso del término anticipado del contrato, lo cual la actual administración nunca realizó.

“SEPTIMO: El presente contrato tendrá la duración del tiempo que demore la gestión encargada, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, lo cual deberá ser realizado a través de un aviso escrito o correo electrónico enviado a la otra con un período de, a lo menos, con 30 días de anticipación, en caso contrario se deberán pagar todos los honorarios pactados, tanto los fijos como los premios que pudiesen resultar de dichas gestiones.” Esta cláusula nunca se cumplió, más aún, cuando el presidente saliente don Salvador Calera en la Asamblea Extraordinaria de Socios en que renunció a su cargo, el 11 de noviembre de 2018, informó que habían ganado los juicios anteriores contra Tesorería y que estaban en la etapa final del último juicio, pero que era el más importante; y posteriormente, cuando realizó la rendición de cuentas por su gestión como Presidente, les informó que existía esta deuda por los honorarios pendientes y que había un contrato firmado que se debía cumplir.

Con respecto a todas las gestiones realizadas, que deben ser pagadas y/o remuneradas, según establece el contrato de honorarios, se puede verificar en los documentos que acompaña, que se cumplió plenamente con el encargo y se tramitaron los juicios completamente desde el año 2013, hasta la última gestión necesaria para conseguir que se declarara la prescripción del último juicio, escrito presentado nuevamente el 26 de marzo de 2019, ya que después sólo quedaba esperar la sentencia y la cual se fundó en los mismos argumentos jurídicos interpuestos en la presentación de Nulidad de todo lo obrado por falta de notificación válida y en subsidio de la Excepción de Prescripción de fecha 17 de octubre de 2017 y, posteriormente, en la de fecha 26 de marzo de 2019 por la Excepción de Prescripción.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Desde el punto de vista jurídico, está fuera de toda duda que el Abogado Tributario Rodrigo Urrea Aguilera, tiene perfecto y legítimo derecho a percibir sus honorarios en razón de los servicios jurídicos prestados a la Corporación que se han descrito previamente, así lo ha establecido en reiteradas sentencias la Excelentísima Corte Suprema, tal como en Rol 40.226- 2017. SENTENCIA ROL CORTE 40.226-2017 DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019. “Considerando 9. Que, por otro lado, y a mayor abundamiento, se debe señalar que, establecida la existencia de un contrato de prestación de servicios por el cual se le encargó al actor la ejecución de un



determinado cometido, y acreditada la ejecución de gestiones concretas para ello, surge necesaria la obligación del mandante de pagar honorarios, los cuales, conforme se estableció, se fijaron teniendo en consideración la realización de un determinado negocio, el cual, finalmente, no se concretó. De este modo, excluyéndose la existencia de una cláusula de gratuidad – desde que las partes convinieron el pago de honorarios–, y no verificada la realización del convenio que servía de parámetro para la determinación de los mismos, se configura el caso en que no existe convención de las partes que fije la remuneración; tampoco concurre ley especial que la regule, ni se acreditó la existencia de una remuneración usual para el negocio específico encomendado, siendo procedente entonces, según el encargo legal, que los tribunales determinen su cuantía, lo que en la especie fue efectuado; de manera tal, que, incluso en el evento que se estime que el actor no cumplió el encargo encomendado por la recurrente, por cuanto las diligencias realizadas por aquel fueron insuficientes para conseguir el propósito buscado, la infracción normativa que dicha conclusión acarrearía, no tendría influencia en lo dispositivo del fallo, por cuanto, en la especie se fijó una remuneración por las gestiones efectivamente ejecutadas, que fueron debidamente acreditadas en juicio, y que, como se señaló, dan derecho al pago por honorarios.” La Excelentísima Corte Suprema ha determinado, incluso que, no habiéndose probado la existencia de un contrato, se deben pagar de igual manera los honorarios por las gestiones realizadas, tal como se puede verificar en el Rol 8485-2010.

En los hechos relatados en este escrito, los honorarios que se demandan, que fueron fijados y acordados en un contrato de honorarios, se estaban cumpliendo y respetando hasta la llegada de la nueva administración de la Corporación.

SENTENCIA ROL CORTE 8485-2010 DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2012.

“VISTO: Se reproduce la sentencia apelada, salvo su fundamento octavo Y SE TIENE, EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que para la determinación de los honorarios demandados judicialmente, debe considerarse en primer término la cuantía convenida en la transacción a que se ha hecho referencia;” Que el convenio de honorarios celebrado entre las partes, dice relación con los servicios profesionales que el demandante acordó prestar al demandado, en representación de sus intereses, en un juicio tributario por el cobro de obligaciones, entablado por la Tesorería General de la República. El encargo



efectuado por la Corporación al demandante tiene todas las características de un mandato, “contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos, por cuenta y riesgo de la primera”, según preceptúa el artículo 2116 del Código Civil, lo cual aparece refrendado por lo señalado en el artículo 2118 del mismo cuerpo legal, que sujeta a las reglas del mandato, los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios o a que está unida la facultad de representar a otra respecto de terceros, cuyo es el caso de los abogados y del demandante, en particular, en relación a su cliente, demandado en estos autos. Art. 2116 del Código Civil. "El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador, y en general, mandatario."

Pues bien, de la definición de mandato recientemente señalada, concluye que estamos ante un contrato por regla general consensual, oneroso y/o gratuito según sea el caso, bilateral. Es consensual, toda vez que se perfecciona por el sólo consentimiento del mandante y mandatario. Pero de manera excepcional, este es un contrato solemne, como es el caso del mandato judicial o aquel mandato otorgado para actos que son solemnes como por ejemplo la compraventa.

Conforme lo señalado en el artículo 2117 del Código Civil, el mandato puede ser oneroso o gratuito. Pero conforme a lo estipulado en N°3 del artículo 2158 del citado cuerpo legal, se estima que, por regla general, es un contrato oneroso, ya que dicha disposición establece la obligación del mandante de pagar la remuneración estipulada o "usual".

Sobre este aspecto, precisa que el mandato no se presume gratuito. En rigor, la gratuidad – si bien permitida- constituye una cláusula accidental del mandato, no es un elemento de su naturaleza, menos aún de su esencia. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la remuneración es propia del mandato.

Así, nuestra doctrina más autorizada en la materia (don David Stitchkin B.) enseña lo siguiente: "... la ley parte del supuesto de que debe pagarse una remuneración, la estipulada o la usual. No se remite a la costumbre para establecer si se debe o no una remuneración, como lo hace para determinar su cuantía. Sino que obliga al mandante a pagar la usual, la que se usa según la época y lugar en que se encomienda la gestión. De todo lo cual se desprende que en nuestro derecho la remuneración es una cosa de la naturaleza del mandato, esto es, que no siendo



esencial en él se entiende pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Por lo tanto, la gratuidad en el mandato debe estipularse expresamente, pues en caso contrario, se presume remunerado y la prueba de la estipulación incumbe al que la alega”

Finalmente, es un contrato bilateral, ya que ambos se graban en favor del otro, incluso en el gratuito, cuando existe la obligación de rendir cuentas o la de reembolsar dineros adelantados, así lo indica la Corte Suprema en la causa Rol 4.332-2013. SENTENCIA ROL CORTE 4.332-2013 DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2014.

"OCTAVO: Que, define el mandato el artículo 2116: "El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera". El mandato puede ser expreso o tácito. El expreso puede darse por instrumento público o privado y aun de palabra, como lo deja dicho el artículo 2123, "el encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aun por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra". El encargo debe ser aceptado por el mandatario. El artículo 2124 previene que "el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario". La aceptación del mandatario puede ser expresa o tácita. Importa aceptación tácita "todo acto en ejecución del mandato (art. 2124, inc. 2º). Es necesario, por lo tanto, que el mandatario ejecute actos positivos de gestión del mandato; o de su silencio mismo, como es el caso del artículo 2125, en que, por excepción, el silencio del mandatario suele importar que acepta el encargo. Es atributo característico y esencial del mandato que el mandatario obre "por cuenta y riesgo" del mandante. El mandatario realiza el negocio encomendado como algo ajeno, de manera que serán para el mandante los beneficios que la gestión reporte y soportará las pérdidas, como si tal gestión la realizara personalmente. El acto ejecutado por el mandatario compromete sólo el patrimonio del mandante. Pero, aunque el mandatario obre en nombre propio y no invista la representación del mandante, en definitiva, será éste quien reciba los beneficios y sufra las pérdidas y, en suma, no obstante, obrará por cuenta y riesgo del mandante (Stitchkin, El Mandato civil. Edit. Jurídica, pág. 60);"

Desde esta perspectiva, recuerda que el art. 2118 del Código Civil establece lo siguiente, plenamente aplicable a los servicios legales prestados por abogados: "Art. 2118. Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato."



En relación al derecho del Abogado Tributario Rodrigo Urrea Aguilera para perseguir el cobro de honorarios, se debe recordar que el art. 2117 del Código Civil establece expresamente lo siguiente: “Art. 2117. El mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración (llamada honorario) es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley, la costumbre, o el juez.”

La remuneración por la asesoría, defensa y representación legal debe ser pagada, bajo ningún punto de vista puede ser considerada gratuita o que no corresponde, inclusive, cuando no existe un contrato que establezca los honorarios entre las partes, ya que se realizaron todas las gestiones que se habían encomendado en todos los juicios y si Tesorería no pudo considerar el último escrito de excepciones presentado por su parte, fue solamente por decisión unilateral y sin aviso de los demandados de revocar el poder; así lo ha indicado la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol 16.551-2016.

SENTENCIA ROL CORTE 16551-2016 DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE FECHA DE 20 DE JULIO DE 2016.

“OCTAVO: Que, de este modo, al haber los sentenciadores acogido la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de tres de los demandados y, en consecuencia, rechazado la demanda a su respecto, no obstante haberse acreditado la prestación de servicios por parte del actor en tanto efectivamente los representó judicialmente, han infringido el artículo 2117 del Código Civil. En la especie, los demandados designaron al actor como su abogado patrocinante, quien tramitó el respectivo juicio ordinario de indemnización de perjuicios en todas sus instancias, causa en la cual éstos obtuvieron a su favor una indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido con ocasión del fallecimiento de su hermano ascendente a la suma de \$ 10.000.000 para cada uno, de manera que los servicios prestados naturalmente generaron en los demandados la obligación de remunerar el aludido mandato judicial.”.

SENTENCIA REEMPLAZO ROL CORTE 16551-2016 DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE FECHA DE 20 DE JULIO DE 2016.

“TERCERO: Que conforme lo dispone el artículo 2117 del Código Civil, no habiéndose pactado expresamente por las partes el monto de los honorarios a pagar, cabe al sentenciador avaluarlos prudencialmente, debiendo para ello tener en consideración, entre otras cosas, lo que se suele pagar en casos de similar naturaleza. En la especie los padres de los demandados acordaron que el mandatario recibiría, como remuneración por el cumplimiento de los servicios



profesionales, el 25% de lo que se obtuviera por concepto de la acción civil, resultando dicho porcentaje acorde con la naturaleza de la gestión encomendada y de los servicios profesionales efectivamente prestados, de manera que esta Corte procederá a acoger la demanda en los términos solicitados por el actor.”

El contrato entre abogado y cliente se sujeta a las reglas del mandato establecidas en el artículo 2116 y siguientes del Código Civil, y es remunerado. A su vez, el artículo 2163 establece que el mandato termina N °3 Por la revocación del mandante, que es precisamente lo que ha ocurrido en el expediente 502-2009, sin aviso o causa alguna que se pueda imputar a su parte.

SENTENCIA ROL CORTE 30.774-2014 DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE FECHA DE 29 DE OCTUBRE DE 2015.

“3° Que, de la lectura del motivo décimo de la sentencia de primera instancia, reproducido por la de segundo grado, se advierte que la demanda de cobro de honorarios se desestimó porque el actor no probó “...la existencia de un contrato de honorarios y sus estipulaciones, entre ellas, el monto y forma de pago de los mismos...”. No obstante lo anterior, en el fundamento precedente, también transcrito, y previo análisis de las normas del Código Civil que regulan el mandato civil, aplicables al de carácter judicial por lo dispuesto en el artículo 395 del Código Orgánico de Tribunales, se lo dio por probado, en la medida que señala que se tiene “...por acreditado que el demandante prestó servicios efectivos a la demandada como patrocinante y mandatario judicial, con carácter remunerado...”;

4° Que, en consecuencia, como se trata de consideraciones que deben ser calificadas de antagónicas, inconciliables entre sí, no pueden subsistir. Lo anterior, conduce a la conclusión que la sentencia carece de las motivaciones de hecho que le deben servir de fundamento; exigencia establecida en el número 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se invalida de oficio la sentencia de veinte de octubre de dos mil catorce, escrita a fojas 54, y se la reemplaza por la que, sin nueva vista, pero separadamente, se dicta a continuación.”

SENTENCIA REEMPLAZO ROL CORTE 30.774-2014 DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE FECHA DE 29 DE OCTUBRE DE 2015.

“2° Que la parte demandante no aportó prueba destinada a acreditar que por las gestiones judiciales que debía efectuar y que llevó a cabo, le correspondía recibir



dicha suma de dinero por concepto de honorarios, por lo que, atento lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2117 del Código Civil, toca que se regulen por la judicatura; y considerando que intervino como abogado patrocinante y mandatario judicial en la tramitación íntegra de cuatro procesos sobre declaración de quiebra y proposiciones de convenio judicial preventivo, que se citan en el motivo tercero de la sentencia de primera instancia, se los regula en la suma de \$ 10.000.000.-; la que deberá ser solucionada con intereses y reajustes a contar de la data de esta sentencia y hasta su pago efectivo, sin costas, por no haber sido el demandado totalmente vencido.”

Que, tal como se puede ver en la sentencia de la Corte Suprema Rol 30.774-2014, que aunque no se pudo acreditar el contrato de honorarios ni sus estipulaciones, bastó solo con la prueba de que se habían realizado las gestiones en el juicio para ordenar el pago de los honorarios y además, sólo ante la ausencia de un pacto escrito de cuota litis entre las partes, que determine el monto de los honorarios, corresponde al juez regular el monto de los mismos; para lo cual deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

- a) La redacción de la demanda y la materia sometida al conocimiento del tribunal, en este caso una defensa tributaria por cobro de obligaciones ante un organismo especializado en el tema como la Tesorería General de la República;
- b) La actividad efectivamente realizada por el demandante, constando en autos que se presentó la defensa y demás gestiones en los procedimientos de cobros de obligaciones tributarios de los Cuadernos Administrativos 705-2005 / 503-2008 / 1073-2010 y 502-2009, hasta obtener sentencias favorables.
- c) El beneficio obtenido por el demandante, quien obtuvo sentencia favorable en 4 procedimientos de cobro (705-2005 / 503-2008 / 1073-2010) y en el último (502-2009) se realizó todas las gestiones necesarias para obtener sentencia favorable, que lo llevó a obtener un ahorro en el pago de los impuestos adeudados en aproximadamente \$2.000.000.000 (dos mil millones de pesos), pero por el actuar de mala fe, por parte de la demandada, que revocó el poder a la demandante al final del procedimiento, utilizó los mismos argumentos para conseguir la sentencia favorable y así, jactarse y adjudicarse todos los logros, incluyendo los juicios anteriores.

A su parecer, otro punto muy importante a tener en cuenta, es que la demandada de manera unilateral, sin dar ningún aviso previo ni posterior, incumpliendo con las cláusulas del contrato de honorarios, revoco el poder, pero sólo al tener conocimiento y certeza de que se había decretado la nulidad de todo



lo obrado y, por ende, la notificación realizada por la Tesorería y esto significaba que ya no había discusión acerca de que todos los cobros del expediente 502-2009 estaban prescritos.

Así las cosas, la Excelentísima Corte Suprema señala claramente en la causa Rol 19.065-2017 de febrero de 2020 y rescatando todos los argumentos de la causa de primera instancia (Rol C-4233-2016 del 20º Juzgado Civil de Santiago) y la ratificación completa de esa sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol 12.388-2016), que al ser la demandada la que decidió prescindir de los servicios de asesoría legal del demandante y contratar los servicios de otro estudio jurídico, contraviniendo abiertamente una Oferta para la prestación de servicios, condenó a la demandada al pago de todos los honorarios, tal cual se hubiese llevado todo el juicio; resaltando “Esta contravención, que pudo haber sido perfectamente salvada mediante la correspondiente notificación por escrito, parece sorprendente para esta magistratura”, indicando que no sólo es contraria al artículo 1545, sino también al principio de la BUENA FE que impone el artículo 1546 ambos del Código Civil.

Agregando que “Atendiendo que únicamente la actitud negligente del demandado impidió la ejecución total de la obligación convenida por parte del demandante, esta juez comprende que el demandado se encuentra obligado al pago de la totalidad de ellos, tal como si se hubiesen prestado” SENTENCIA CAUSA ROL C-4233-2016 DEL 20º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

“DÉCIMO PRIMERO: De acuerdo a lo expresado en el considerando anterior, no puede sino concluirse que la demandada decidió prescindir de los servicios de asesoría legal del demandante y contratar los servicios del estudio jurídico en el cual trabajaba el abogado don Juan Cristóbal Iturieta Alvarado. Esta juez desconoce el motivo real por el cual se tomó dicha decisión, pero no puede sino tener la convicción consistente en que la forma de materializar tal decisión contravirtió abiertamente la Sexta a.1. de la “Oferta para la prestación de servicios de Asesoría Jurídica”. Esta contravención, que pudo haber sido perfectamente salvada mediante la correspondiente notificación por escrito, parece sorprendente para esta magistratura, es contraria no solamente el artículo 1545 del Código Civil, sino a la buena fe que impone el artículo 1546 del mismo cuerpo legal en la ejecución de los contratos. Atendiendo que únicamente la actitud negligente del demandado impidió la ejecución total de la obligación convenida por parte del demandante, esta juez comprende que el demandado se encuentra obligado al pago de la totalidad de ellos, tal como si se hubiesen prestado, resultado del todo



procedente la pretensión del demandante fundada en el artículo 1489 del Código Civil., razón por la cual se condenará a la demandada al pago de las 500 Unidades de Fomento (UF) a las cuales se comprometió en conformidad a la propuesta de servicios profesionales de fecha 23 de junio de 2014 dirigida a ACCENTURE CHILE ASEOSRÍAS Y SERVICIOS LIMITADA por Firma Lizama Castro y Compañía Limitada, a fojas 1 y la oferta de servicios de asesoría jurídica de fecha 29 de julio de 2014, dirigida a ACCENTURE CHILE ASEOSRÍAS Y SERVICIOS LIMITADA a fojas 4”.

La sentencia anterior, en la causa Rol 19065-2017 de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 27 de febrero de 2020, recoge todos los argumentos de la sentencia de primera instancia y que fueron respaldados y mantenidos por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en Rol 12388-2016.

SENTENCIA ROL CORTE 19065-2017 DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020.

“Séptimo: Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe consignar que no se produjo la infracción que la recurrente alega respecto de los artículos 1545 y 1560 del Código Civil, relativos a la interpretación de los contratos toda vez que, como esta Corte lo ha dicho reiteradamente, dicho proceso es una cuestión de hecho que escapa al control de casación, privativo y exclusivo de la judicatura del grado, salvo que, por su intermedio, se lo desnaturalice, cuyo no es el caso. En otro orden de consideraciones, y respecto de la vulneración de los artículos 1467, 1999, 2006, 2117 y 2117 del Código Civil, parte de la base que no se prestó la totalidad de los servicios pactados, circunstancia que, como se señaló, fue establecida como hecho por la sentencia impugnada, no obstante lo cual decidió condenar al pago de todos los honorarios pactados, teniendo en consideración que fue “la actitud negligente de la demandada la que impidió la ejecución total de la obligación convenida”, hecho que no fue desvirtuado por la recurrente por medio del arbitrio en análisis.”

El artículo 2117 del Código Civil, prevé la posibilidad de que en el mandato los contratantes puedan convenir una remuneración u honorario, cuestión que las partes hicieron en el convenio de prestación de servicios suscrito, por lo que las partes deben ceñirse a dicho contrato y en particular a su cláusula tercera.

Sobre este aspecto, dice sar que el mandato no se presume gratuito. En rigor, la gratuidad –si bien permitida- constituye una cláusula accidental del mandato, no es un elemento de su naturaleza, menos aún de su esencia. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la remuneración es propia del mandato. Así,



nuestra doctrina más autorizada en la materia (don David StichkinB.) enseña lo siguiente: “De todo lo cual se desprende que en nuestro derecho la remuneración es una cosa de la naturaleza del mandato, esto es, que no siendo esencial en él se entiende pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Por lo tanto, la gratuidad en el mandato debe estipularse expresamente, pues en caso contrario, se presume remunerado y la prueba de la estipulación incumbe al que la alega”

En conexión con lo anterior, en lo que respecta a las obligaciones de todo mandante para con su mandatario, el art. 2158 N° 3 e inciso final del Código Civil es claro en establecer que: “Art. 2158. El mandante es obligado... 3°. A pagarle la remuneración estipulada o usual; No podrá el mandante dispensarse de cumplir estas obligaciones, alegando que el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito, o que pudo desempeñarse a menos costo; salvo que le pruebe culpa.”

En cuanto al artículo 2158 N°3 del mismo cuerpo legal, que contempla entre las obligaciones del mandante, la de pagarle la remuneración estipulada o usual al mandatario, hecho que el demandado le hubiere revocado el patrocinio y poder al demandante antes de que se terminara el juicio, sin cumplir su obligación de informar según lo acordado y pactado, no pone término a la obligación del mandante de remunerar al mandatario en los términos estipulados (artículo 2158 N°3 del Código Civil), en la medida que se ha verificado la circunstancia convenida para que surja la obligación de pagar los honorarios, cual es, según el contrato, las establecidas en la cláusula tercera en sus letras a), b), c), d), e) y f), es decir, d) que se le haya dado curso a la excepción de prescripción; e) Que se haya dictado sentencia que de término a las gestiones del cuaderno administrativo 502-2009; y f) un premio por el ahorro o lo que deje de pagar la Corporación al término de las gestiones en los 4 cuadernos administrativos; y a simple vista se puede ver que se cumplieron todas las circunstancias convenidas.

Sostener lo contrario, implica dejar entregado el cumplimiento de la obligación de remunerar al mandatario, a la voluntad unilateral del mandante, que puede revocar el mandato a su arbitrio, criterio que pugna con la esencia misma de la obligación como vínculo jurídico

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de autos el comportamiento contractual de la Corporación, también, constituye a su vez una flagrante vulneración de lo dispuesto por los art. 1545 y 1546 del Código Civil.

El art. 1545 recoge el principio contractual más básico y esencial del Derecho de los Contratos consistente en que lo pactado debe ser cumplido “pacta



suntservanda”. A tal punto debe ser cumplido que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento o por causas legales.” Esta es una norma a través de la cual se consagra la fuerza obligatoria de los contratos, que implica que los pactos que las partes celebren – atendido el principio de la autonomía de la voluntad – deben cumplirse, ya que los obligan. Y el mecanismo a que acude el legislador para consagrar dicha obligatoriedad, es el de asimilar el contrato a la ley, una metáfora, por cierto, ya que son evidentes las diferencias entre uno y otra.

Hasta ahora los hechos demuestran que la actual administración de la Corporación, en lo que dice relación con honrar la deuda de honorarios que tienen para con su parte a causa de la asesoría, representación y defensa tributaria ante la Tesorería, considera que esta disposición no le resulta aplicable y que, en consecuencia, es irrelevante lo que haya pactado y que exista una deuda de dinero a su favor que la obliga.

Los hechos también demuestran que la actual administración de la Corporación no ha obrado con la buena fe contractual que le exige el art. 1546. Sin ir más lejos, llegó al extremo de desconocer abierta y públicamente el adeudar algún honorario relacionado con todos los juicios ganados, así como la existencia de un Contrato de Honorarios, al punto que teniendo pleno conocimiento de los años que lleva defendiendo a la Corporación, revoco el poder en el juicio sin aviso ni explicación alguna, hasta la fecha. A la vez la demandada infringe también el artículo 1546 del Código Civil, que regula la buena fe en la ejecución de los contratos, en la medida que el demandado se ha beneficiado de los servicios profesionales del demandante – quien habría estudiado la mejor teoría jurídica para el caso, planificado, redactado y alegado la Nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento válido y en subsidio la Excepción de prescripción, haya acompañado pruebas en los juicios, haya estado pendiente de insistir en que se fallaran las excepciones, entre otras gestiones y lo principal es que se haya ganado los 4 juicios en un periodo entre los años 2013 al 2019– sin cumplir lo pactado, al revocar y contratar un nuevo abogado que lo representó al final del proceso cuando ya estaba todo preparado para que se acogiera la prescripción.

Pide tener presente lo señalado precedentemente, al momento de resolver cada una de las peticiones formuladas en la presente demanda, principalmente en cuanto a: a) Que, existe un contrato de honorarios válidamente firmado por las partes. b) Que, existen dos Mandatos Judiciales de los años 2013 y 2017, ratificando el Contrato de Honorarios. c) Que, existe un cumplimiento de los 3 primeros pagos establecidos en el Contrato. d) Que, se realizaron todas las



gestiones en los 4 juicios encargados. e) Que, en el transcurso de los años 2013 al 2019, se ganaron los 4 juicios encargados. f) Que, el beneficio obtenido por la Corporación alcanzo casi a los \$2.000.000.000.- (dos mil millones de pesos). g) Que, de haber perdido estos juicios el monto pagado por la sociedad que administra el estadio (Unión Española S.A.D.P.) hubiese rebajado ese pago del precio de compra del Estadio. h) Que, si no hubiese alegado los años 2013, 2015 y 2017, la Nulidad de todo lo obrado por falta de notificación válida y la excepción de prescripción, en los distintos juicios, la Corporación no hubiese tenido opción de defensa real. i) Que, siempre cumplió con todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Honorarios. j) Que, el presidente saliente de la Corporación, informó que se adeudaban los honorarios en su rendición de cuentas y en correos a la nueva administración. k) Que, la demandada unilateralmente puso término al contrato de honorarios, sin ninguna clase de aviso ni causa, desconociendo todo principio de BUENA FE, en que se sustenta nuestro ordenamiento jurídico. l) Que, la demandada ha desconocido todo el trabajo y gestiones realizadas, existiendo pagos, sentencias, escritos, resoluciones y expedientes que acreditan lo contrario y que le fueron exhibidos.

Solicita, de acuerdo a las disposiciones legales que cita, tener por interpuesta demanda en juicio sumario de cobro de honorarios en contra de la CORPORACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL UNIÓN ESPAÑOLA, representada por su presidente don José Antonio Marino Conde, hacer lugar a ella en todas sus partes y, en definitiva: a) Condenar a la Corporación Deportiva y Social Unión Española a pagar al Abogado Rodrigo Urrea Aguilera la suma de \$327.402.473.- (trescientos veintisiete millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos), equivalentes a los honorarios fijos adeudados y pactados a todo evento y al 15% a título de premio por los ahorros y/o beneficios económicos obtenidos por la Corporación por o a causa de los cuatro juicios ganados en el cobro de obligaciones tributarias con la Tesorería General de la República. Ello, más los reajustes e intereses correspondientes devengados hasta la fecha de su pago efectivo. b) Condenar expresamente a la Corporación Deportiva y Social Unión Española a pagar las costas de la causa.

Con fecha 19 de agosto de 2021 y a folio 24, hay constancia e haberse celebrado la audiencia de estilo con la asistencia de ambas partes sin que se lograra conciliación, contestando por escrito la demandada

Al efecto, **a folio 22 con fecha 19 de agosto de 2021** Don Francisco Fuentes Valpuesta, Job Jorquera Barahona y Ruth Zúñiga Ramírez, abogados, actuando en representación de la demandada **CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL**



UNIÓN ESPAÑOLA, contestan la demanda, solicitando desde ya su completo y absoluto rechazo, con expresa y ejemplar condena en costas,

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES.

LA DEMANDA DE AUTOS

1. Como consta en el expediente digital de autos, don Rodrigo Urrea Aguilera dedujo acción de cobro de honorarios ante este tribunal, solicitando se condene a la Corporación Deportiva y Social Unión Española (en adelante simplemente “la Corporación” o “Unión Española”), a pagarle la suma total \$327.402.473.- (trescientos veintisiete millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos), derivados de aparentes beneficios económicos obtenidos por la Corporación por o a causa de cuatro juicios ganados en el cobro de obligaciones tributarias con la Tesorería General de la República, y que se desglosaría de la siguiente forma: i) Un primer pago fijo de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos); y, ii) Un segundo pago consistente al 15% del beneficio efectivo de obtenido por la Corporación, el cual avalúa en el monto de \$297.402.473.- (doscientos noventa y siete millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos).

2. El demandante alega que, con fecha 30 de octubre de 2013 suscribió un contrato de prestación de servicios con la Corporación, representada legalmente – en ese entonces- por don Salvador Calera González en su calidad de Presidente del Directorio de la Corporación, y en el que se habría pactado la forma y plazo del pago de honorarios profesionales por sus servicios de abogado, consistentes principalmente en la defensa de 4 litigios tributarios que mantenía la Corporación con la Tesorería General de la República, singularizados bajo los siguientes números: (i) Cuaderno Administrativo 705-2005; (ii) Cuaderno Administrativo 503-2008; (iii) Cuaderno Administrativo 502-2009; y (iv) Cuaderno Administrativo 1073-2010.

3. Pues bien, la demanda deducida es absolutamente improcedente, toda vez que, en primer lugar y como se señalará más adelante, se pretende ejercer una acción que - además de ser improcedente- se encuentra largamente prescrita por haber transcurrido el plazo de dos años establecido por el legislador para el cobro de las demandas por cobro de honorarios.

4. Asimismo, e incluso en el improbable evento que el tribunal rechace la excepción de prescripción extintiva anteriormente señalada, lo cierto es que igualmente no procederá pago alguno por concepto de cobro de honorarios, toda



vez que estos dicen relación con juicios en que el demandante no realizó intervención ni contribución funcional alguna para la obtención de los resultados favorables de su representada.

5. En efecto, y como se acreditará en la etapa procesal pertinente, el juicio relativo al Cuaderno Administrativo N° 502-2009, seguido por la Tesorería General de la República contra la Corporación, concluyó mediante sentencia favorable a esta última por las gestiones de abogados distintos del Sr. Urrea, a quien, incluso, se le revocó su mandato y poder en la referida causa, procediendo a designarse nuevos abogados.

II. LA ACCIÓN DE AUTOS SE ENCUENTRA LARGAMENTE PRESCRITA

1. Como señalaron, hacen presente que la acción de autos se encuentra largamente prescrita, razón por la cual necesariamente este tribunal deberá omitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

2. El artículo 2492 del Código Civil (“CC”) define a la prescripción en nuestro derecho, señalando que: “La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción”. De este modo, dicho precepto define conjuntamente a ambos tipos de prescripción, esto es, a la prescripción adquisitiva y extintiva.

3. De la definición transcrita se advierte que la prescripción extintiva, en tanto extingue acciones y derechos ajenos, se erige como uno de los modos de extinguir las obligaciones, de conformidad además con lo preceptuado en el artículo 1.567 del CC, que dispone: “Las obligaciones se extinguen: N.º 10, por la prescripción”, aludiendo naturalmente dicho precepto a la prescripción extintiva o “liberatoria”.

4. Asimismo, el CC, en el párrafo 4º del Título 42 y último del Libro Cuarto trata “De ciertas acciones que prescriben en corto tiempo”, las cuales se encuentran consagradas en los artículos 2.521 a 2.524 de dicho cuerpo legal, y hacen excepción a la regla general del Art. 2.515 sobre los plazos de la prescripción extintiva llamada ordinaria.

5. Estas disposiciones relativas a la prescripción extintiva de corto tiempo son relevantes por cuanto el actor pretende el pago de supuestas obligaciones contraídas en virtud de la celebración de un contrato de honorarios que tenía por



objeto la prestación de servicios profesionales del abogado del Sr. Urrea -demandante en la presente causa- y por ende las obligaciones que alega le son adeudadas provienen del ejercicio de una profesión liberal de acuerdo a las palabras del Código Civil en su inciso segundo del artículo 2521, que dispone: “Prescriben en dos años los honorarios de jueces, abogados, procuradores; los de médicos y cirujanos; los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general, de los que ejercen cualquiera profesión liberal”.

6. Por tanto expresan que no cabe duda que el marco jurídico aplicable en relación a las obligaciones que el actor alega como incumplidas, es aquel dispuesto por el artículo 2521 recién transcrito, circunstancia que además fluye de la sola lectura del petitorio de su demanda, en el que solicita al tribunal “a) Condenar a la Corporación Deportiva y Social Unión Española a pagar al Abogado Rodrigo Urrea Aguilera la suma de \$327.402.473.- (trescientos veintisiete millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos), equivalentes a los honorarios fijos adeudados y pactados a todo evento y al 15% a título de premio por los ahorros y/o beneficios económicos obtenidos por la Corporación por o a causa de los cuatro juicios ganados en el cobro 5 de obligaciones tributarias con la Tesorería General de la República. Ello, más los reajustes e intereses correspondientes devengados hasta la fecha de su pago efectivo.”

7. Por tanto, oponen la excepción de prescripción extintiva respecto de todas y cada una de las obligaciones que el actor estima incumplidas, por cuanto han transcurrido respecto de ellas -conforme dirán- el plazo de prescripción legal de 2 años, encontrándose entonces ya prescritas al momento de notificarse la presente demanda a la Unión Española, excepción que por sí sola basta para que – en caso de ser acogida- se rechace en su totalidad la demanda incoada en autos.

8. Sin perjuicio de lo anterior, expondrán cómo se cumplen -en la especie- cada uno de los requisitos y condiciones indispensables para que el deudor quede liberado por la prescripción extintiva; los que la doctrina señala que son: (i) Que la acción sea prescriptible; (ii) El transcurso del tiempo prefijado por la ley, y (iii) El silencio en la relación jurídica, o sea, la inactividad de las partes.

i. Prescriptibilidad de la Acción deducida

9. La regla general es que todas las acciones sean prescriptibles, a menos que concurra disposición legal que señale lo contrario. Previamente se hizo referencia al artículo 2521 del CC, respecto a que las acciones que persiguen el



cobro de los honorarios “profesionales” prescriben en el plazo de 2 años, señalando como ejemplo los honorarios de los abogados, lo que sucede en la especie, por lo que no es necesario ahondar en este punto.

ii. El transcurso del tiempo.

10. Siendo éste el elemento más característico de la prescripción, lo cierto es que el plazo de dos años que dispone el artículo 2521 ya citado se ha cumplido con creces respecto de las obligaciones que alega el actor se le adeudan por concepto de pago del 15% de premio por juicios ganados. La ley no dispone ninguna norma especial respecto a desde cuándo debe computarse el plazo de las prescripciones de corto tiempo, por lo que se debe atender a lo dispuesto en el artículo 2514 del Código Civil respecto a la prescripción extintiva en general, cuyo plazo señala la ley empieza a contarse desde que la obligación se haya hecho exigible, es decir, en el caso sublite, desde que se terminaron de ofrecer los servicios pactados relativos a la defensa de cada uno de los juicios tributarios que el Sr. Urrea afirma ganó para la Corporación.

11. En ese sentido, es importante destacar que el actor expone en su libelo que se le adeudan dineros por dos conceptos: el primero de ellos, por el honorario pactado a todo evento, respecto del cuaderno administrativo Rol 502-2009, ascendente a la suma de \$30.000.000.- en total; y, en segundo lugar, los honorarios por concepto del “premio” pactado, equivalente al 15% sobre el ahorro que significó para la Corporación el acogimiento de las excepciones de prescripción de las deudas tributarias, por un total de \$297.402.473.-, cifra que resulta de la operación aritmética de calcular el 15% del valor total de contingencia que, según informa en su demanda, correspondería a cada juicio, es decir, los Cuadernos Administrativos 705-2005, 503- 2008, 1073-20210, 502-2009.

12. Para efectos de orden, analizaren cómo la obligación de pago de estos honorarios se encuentra prescrito respecto de cada juicio, por cuanto desde ya advierten que para efecto de poder computar el plazo desde que las obligaciones demandadas se hicieron exigibles y determinar si efectivamente se encuentran prescritas, hay que remontarse a las fechas en que fueron acogidas las excepciones de prescripción que el Sr. Urrea alega fueron diligentemente opuestas por él y por ende, desde que se verificó la exoneración para la Corporación del pago de los impuestos adeudados.

Veamos. a. Cuaderno Administrativo 705-2005: Actor alega que el monto discutido era de \$182.151.000.-, por lo que el Sr. Urrea estaría demandando por concepto de premio de este juicio la suma \$27.322.650.-, es decir, el 15% del monto total



discutido. La excepción de prescripción informa que fue acogida el 18 de junio de 2014, ergo, a la fecha de notificación de la presente demanda -el 17 de junio de 2021- esta obligación ya se encuentra prescrita.

b. Cuaderno Administrativo 503-2008: Actor alega que el monto discutido era de \$23.475.155.-, por lo que el Sr. Urrea estaría demandando por concepto de premio de este juicio la suma de \$3.521.273,25.- es decir, el 15% del monto total discutido. La excepción de prescripción informa que fue acogida el 23 de septiembre de 2015, ergo, a la fecha de notificación de la presente demanda -el 17 de junio de 2021- esta obligación ya se encuentra prescrita.

c. Cuaderno Administrativo N° 1073-2010: Actor alega que el monto discutido era de \$18.315.000.-, por lo que el Sr. Urrea estaría demandando por concepto de premio de este juicio la suma de \$2.747.250.- La excepción de prescripción informa que fue acogida el día 18 de junio de 2014, ergo, a la fecha de notificación de la presente demanda -el 17 de junio de 2021- esta obligación ya se encuentra prescrita.

d. Cuaderno Administrativo N° 502-2009: El actor alega que el monto discutido era de \$1.758.742.002., por lo que el Sr. Urrea calcula le corresponde \$263.811.300,3.- por concepto de premio. Adicionalmente, señala que respecto a este Cuaderno Administrativo se le adeuda además la suma total de \$30.000.000., por concepto de honorarios fijado a todo evento según el contrato de prestación de servicios celebrado con la Corporación; esto es, \$5.000.000.- al momento de la notificación que se le dio curso a la excepción de prescripción de las obligaciones tributarias de este Cuaderno Administrativo, y los \$25.000.000.- restantes serían pagados al momento de la notificación de la sentencia que dé término a las gestiones del referido Cuaderno Administrativo. Dado que el mismo Sr. Urrea alega antecedentes distintos relativos al presente cuaderno administrativo, los analizan con más detalle.

13. Efectivamente el actor persigue el pago de los honorarios en el Cuaderno Administrativo N° 502-2009, a pesar que reconoce que su poder le fue revocado en dicha causa, informando a este tribunal que con fecha 28 de marzo de 2019, se revocó su poder en el referido pleito, y un día después, con fecha 29 de marzo de 2019, nuevos abogados habrían asumido la defensa de la Corporación, oponiendo la excepción de prescripción en dicha causa.

Advierten que la Corporación designó nuevos directores mediante escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2018 otorgada ante el Notario de Santiago don Hernán Cuadra Gazmuri, y quienes pretendían designar abogados de su



confianza, lo cual se vio reflejado en este expediente administrativo, por cuanto no puede soslayarse que el mandato judicial -a pesar de producir efectos procesales- no pierde su naturaleza de contrato intuitu personae, como lo dispone el artículo 2116 del Código Civil al definir al contrato de mandato en sede civil.

14. A pesar de lo anterior, el demandante pretende en este juicio cobrar los honorarios que aduce le corresponden por la tramitación del Cuaderno 502-2009, en circunstancias que su poder fue revocado por la Corporación y conforme se dirá más adelante, a propósito de las restantes excepciones que se opondrán, en definitiva, no fue por la gestión de este abogado Sr. Urrea que se logró la sentencia favorable para la Corporación en el juicio Cuaderno Administrativo Rol 502-2009.

15. Por tanto, y sin perjuicio que no se entrará a calificar en este análisis de la prescripción si correspondía o no reclamo alguno por parte del Sr. Urrea ante la Corporación por la revocación del poder, lo cierto es que en el supuesto que el Sr. Urrea hubiere pretendido cobrar los honorarios que alega le correspondían igualmente por la defensa de este juicio en virtud del contrato de honorarios, tal obligación se hizo exigible y estuvo disponible para él, al menos, desde el día 28 de marzo de 2019, fecha en que constó en el expediente administrativo la presentación de revocación de patrocinio y poder por parte de la Corporación al Sr. Urrea. Precisamente, si el demandante alega haber estado al frente de la defensa de la Corporación en este juicio, la diligencia mínima que le impone la profesión es la atención a la marcha del proceso por lo que no pudo hoy alegar que le fue imposible conocer de la revocación de su poder en los referidos autos.

16. De modo tal que incluso si hiciéramos el ejercicio mental de estimar que el Sr. Urrea pudo demandar estos honorarios -cuestión que niegan categóricamente según expondrán más adelante- lo cierto es que también tales obligaciones se encontrarían prescritas, verificándose el lapso de tiempo exigido por el legislador respecto de estas.

iii. Silencio de las partes. Inactividad

17. La prescripción extintiva es una institución que busca consolidar las relaciones jurídicas proveyéndolas de certeza, sancionando al acreedor negligente que no ha ejercitado sus derechos oportunamente. Es por ello que el último requisito para que opere la prescripción liberatoria es que las partes estén en total inactividad a fin que no opere la interrupción de la prescripción.



18. El CC, en su artículo 2523, señala refiriéndose a las prescripciones de corto tiempo: “Las prescripciones mencionadas en los dos artículos precedentes corren contra toda clase de personas, y no admiten suspensión alguna. Interrúmpense: 1.º Desde que interviene pagaré u obligación escrita, o concesión de plazo por el acreedor; 2.º Desde que interviene requerimiento. En ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2515.”

19. Como acreditarán en la oportunidad procesal correspondiente, tanto acreedor como deudor de las obligaciones que se estiman incumplidas según la demanda han estado en completa inactividad, circunstancia que fluye además de los dichos del demandante.

20. A mayor abundamiento, destacan que su representada nunca ha reconocido ni expresa ni tácitamente adeudar los montos demandados por el Sr. Urrea en los términos que señala el artículo 2523, es decir, “no ha intervenido pagaré u obligación escrita, o concesión de plazo por el acreedor” a fin que pueda pretenderse que pudo haberse producido una interrupción natural del plazo de prescripción, en caso que se estime lo contrario, corresponderá al demandante acreditar esta circunstancia.

21. En suma, en base a las alegaciones expuestas, es prístino que las obligaciones demandadas por el actor relativas a honorarios por concepto de “premio”, pretendidas respecto de los Cuadernos Administrativos 705-2005, 503-2008, 1073-2020 y 502-2009, y los honorarios “a todo evento” pretendidos respecto del cuaderno 502-2009, se encuentran ineludiblemente prescritas, razón por la cual la demanda de autos debe ser desestimada en todas sus partes.

III. TOTAL DESCONOCIMIENTO DE LOS COBROS PRETENDIDOS POR LA ACTUAL CORPORACION.

1. El actor alega que el contrato de honorarios suscrito con la Corporación fue celebrado en el año 2013, en la época en que esta estaba representada por su entonces Presidente don Salvador Calera González, quien desempeñó el cargo y presidió a su representada durante más de 15 años, en un puesto sujeto a las consecuentes responsabilidades legales y convencionales que implica. Entre estas responsabilidades se encuentra la de rendir cuenta de su administración, mandato y gestión a la Asamblea de Socios de la Corporación, en relación a la marcha de la institución, sus estados financieros y ciertamente de todos los contratos que bajo su alero fueron suscritos por la Corporación.



2. El cargo de Presidente el Sr. Calera lo ejerció hasta el día 15 de noviembre de 2018, fecha en la cual se eligieron nuevos directores para la Corporación. Destacan que quien fuera Presidente nunca rindió cuenta alguna de su gestión y no ha debidamente cumplido tal obligación legal para con el nuevo Directorio de su representada, quien no ha podido entrar en conocimiento de los actos que ejecutó el Sr. Calera mientras ejerció su mandato, circunstancia que deviene además en esencial en el presente juicio, en que el actor pretende el cobro de sumas millonarias por una gestión que no ha sido puesta conforme a derecho en conocimiento de su representada.

3. Es por ello que existen actualmente dos procesos tramitándose ante los tribunales de justicia, en que la Corporación busca perseguir que el Sr. Salvador Calera rinda cuenta de su mandato y de todas las gestiones realizadas, incluyendo el contrato de honorarios que pretende el actor hacer valer en esta demanda.

4. Así, con fecha 9 de septiembre su representada dio inicio a un juicio declarativo de obligación de rendir cuentas en procedimiento sumario, el cual se encuentra actualmente en tramitación ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-13.932-2020, el cual fue recibido a prueba, encontrándose suspendido de conformidad con el artículo 6 de la Ley N° 21.226.

Por otro lado, también está en tramitación el juicio de cuentas propiamente tal mediante Expediente Arbitral Rol N° 1-2020 ante el Árbitro don Francisco del Río Pacheco, quien aceptó y prestó juramente del cargo el día 06 de abril de 2020. La designación de este Árbitro fue concedida mediante sentencia de fecha 03 de marzo de 2020, por el 15° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-32067-2019.

5. De este modo, es evidente que difícilmente puede darse curso a un procedimiento -y mucho menos acoger la pretensión del demandante- cuando emana de supuestos actos desconocidos absolutamente por la actual Corporación, y respecto de los cuales no se ha rendido cuenta alguna por parte de don Salvador Calera.

IV. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. EL DEMANDANTE PRETENDE COBRAR HONORARIOS POR UN JUICIO EN QUE NO COLABORÓ SUSTANCIALMENTE.

1. Finalmente, y a efecto de enervar la acción de cobro de honorarios pretendido por el demandante respecto al Cuaderno Administrativo 502-2009, es señalan que malamente puede su representada ser condenada a pagar honorarios al actor respecto de un juicio en que este no desarrolló las gestiones tendientes a



llevarlo a estado de término ni tampoco colaboró sustancialmente para obtener una sentencia favorable para la Corporación. Veamos.

2. Con fecha 19 de agosto de 2019, se dictó sentencia en dicho Cuaderno Administrativo, donde puede advertirse que los abogados que dedujeron la excepción de prescripción en representación de Club Deportivo y Social Unión Española, fueron los señores Félix Antolín Martínez, Francisco Fuentes Valpuesta y Manuel Valdés Pacheco, es decir, en la misma sentencia se aprecia que el Sr. Urrea no ejerció la defensa judicial de la Corporación en dicho proceso.

3. Según se ha expuesto, una vez que se reanudó el proceso luego de haber sido declarado nulo por falta de emplazamiento por la Il'tma. Corte de Apelaciones de Santiago mediante sentencia dictada en causa Rol 8669-2019, la Corporación a través de su nuevo directorio revocó el poder para actuar en el Cuaderno Administrativo 502-2009 del Sr. Urrea otorgando la defensa y representación judicial a los referidos nuevos abogados, quienes fueron los encargados a partir del día 28 de marzo de 2019 a continuar con la prosecución del juicio, realizar gestiones y trámites necesarios a fin de conseguir que este llegara a estado de sentencia, y específicamente obtuvieron una sentencia absolutoria para la Corporación: todas estas gestiones fueron realizadas por abogados distintos del Sr. Urrea, lo que acreditarán en la oportunidad procesal correspondiente, de modo que no se vislumbra fundamento alguno para que se acceda a la demanda de cobro de los honorarios del referido juicio.

4. Importante es referirse también al hecho que el actor alega que los abogados que continuaron con la tramitación del proceso se valieron de su estrategia judicial para poder obtener un resultado favorable. El Sr. Urrea, en el párrafo 25 de su demanda, señala lo siguiente: "Frente a esta noticia de la Nulidad, el nuevo Directorio de la Corporación elegido el 26 de noviembre de 2018, ya que ese mismo mes había renunciado el presidente anterior don Salvador Calera, y en su afán de atacar y desmerecer cualquier gestión realizada por la Directiva anterior, desconoció el contrato de prestación de servicios y sin dar ningún tipo de aviso, y al ver la posibilidad de arrogarse el éxito de haber logrado ganar el juicio tan importante y tan comentado en la colectividad española y así evitar el pago de los honorarios, indicando que eran personales y debían ser asumidos por la Directiva anterior, aprovechó la ocasión para revocar mi poder en la causa y designar otros abogados, que sólo siguieron, casi al pie de la letra, todo lo que ya estaba hecho y así poder decir que ellos habían ganado el juicio y que esta parte jamás había realizado ninguna gestión en ningún juicio y que nunca habíamos tenido poder en la causa y que para nombrarnos no se había realizado



ninguna asamblea de socios, ya que el presidente no tenía facultades para nombrar ni contratar abogados”

5. Por tanto, el Sr. Urrea se encuentra alegando que aparentemente la revocación de su poder en el Cuaderno administrativo correspondió a un ardid de la Corporación y su nuevo Directorio, elegido el 26 de noviembre de 2018, aprovechándose que el juicio fue retrotraído al estado de la notificación de la demanda, para revocar su poder y encargar la defensa a abogados que solo tendrían que seguir su estrategia judicial. Huelgan comentarios. Con todo, recaerá en el actor la carga de probar semejantes alegaciones.

6. Además, de los dichos del actor se advierte que -a su juicio- el Directorio no tenía derecho a revocar su mandato para actuar en el referido Cuaderno Administrativo 502-2009. Sobre este punto es menester recordar lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 18.120 sobre Comparecencia en Juicio, específicamente sus incisos primero y tercero, que disponen: “La primera presentación de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no contenciosos ante cualquier tribunal de la República, sea ordinario, arbitral o especial, deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión...El abogado conservará este patrocinio y su responsabilidad, mientras en el proceso no haya testimonio de la cesación de dicho patrocinio. Podrá, además, tomar la representación de su patrocinado en cualquiera de las actuaciones, gestiones o trámites de las diversas instancias del juicio o asunto.

7. Por tanto, la actuación de la Corporación es perfectamente ajustada a derecho y además en plena concordancia con la naturaleza de los mandatos judiciales, que son verdaderos contratos de mandato para producir efectos en un proceso, pero que igualmente gozan del carácter de intuitu personae, es decir, se celebran en virtud de las características personales del sujeto.

8. De modo tal que el Sr. Urrea pretende cobrar honorarios respecto de un juicio en el que, en definitiva, no fue el responsable de la defensa ni posterior absolución de la Corporación, por lo que su pretensión es completamente improcedente.

Por resolución de 31 de agosto de 2021 y a folio 26 se recibió la causa a prueba rindiéndose la documental, testimonial y confesional agregada a los autos.

A folio 77 y con fecha 18 de julio de 2022 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:



EN CUANTO A LA EXCEPCION DE LITIS PENDENCIA.

PRIMERO: Que a folio 21 con fecha 19 de agosto de 2021, la parte demandada formula la excepción dilatoria de litis pendencia por conexidad.

Fundamenta su defensa en que el objetivo de la presente causa es que declare que, tanto el objeto pedido como la causa de pedir en el juicio se refieren al pago de honorarios del abogado Sr. Rodrigo Urrea Aguilera en virtud de supuestos servicios legales que habrían sido pactados en un contrato de honorarios suscrito por él y la Corporación Deportiva y Social Unión Española en el año 2013, la cual habría concurrido representada por su -en ese entonces- Presidente, don Salvador Calera González.

Sin embargo, dice, dicha persona cesó en su cargo el año 2018, debido a la designación de nuevos directores por parte de la Asamblea de Socios de la Corporación, y sin nunca haber rendido cuenta de su gestión, por lo que hoy en día tiene pendiente dos juicios en su contra en su calidad de Ex Presidente, los cuales están destinados a que:

- (i) se declare su obligación de rendir cuenta; y,
- (ii) se proceda a la respectiva rendición de cuentas a fin de determinar el alcance de la oponibilidad de sus actos.

Agrega que el Club Social y Deportivo Unión Española se constituyó por medio de escritura pública de fecha 09 de diciembre del año 1935, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Luis Azocar Álvarez, bajo el repertorio N° 55. Mediante el Decreto N° 409 del Ministerio de Justicia, de fecha 28 de enero de 1937 y publicado el día 04 de febrero de 1937. En este sentido, se canceló la personalidad jurídica (i) del Centro Español de Instrucción y Recreación y (ii) de la Unión Deportiva Española, constituyéndose ambas corporaciones en una sola y, por tanto, concediéndose la personalidad jurídica a la Corporación que actualmente se mantiene vigente.

Con fecha 11 de junio del año 2002, se celebró una Junta de Directorio de la Corporación con el objeto de designar nuevos Directores para la misma. El acta de la reunión fue debidamente reducida a escritura pública con fecha 26 de junio del año 2002 ante la Notario 3 4 Titular de la 42° Notaría Pública de Santiago, doña María Gloria Acharán Toledo, anotada bajo el Repertorio N° 11.508. En esta Junta se designaron como Directores a los señores don Salvador Calera González, don Rafael Martínez Urrengoechea, don Francisco Cerezuela Muñoz y don Juan Las Heras Ruffat.



Luego, la directiva de la época eligió los cargos que cada uno de estos Directores ocuparía en la Corporación, resultando designado don Salvador Calera González como Presidente.

La demanda incoada en autos, fue en dicha calidad que se habría suscrito en el año 2013 el contrato de honorarios que invoca el demandante para acreditar la existencia de un contrato de servicios con la Corporación.

El Sr. Calera desempeñó el cargo y presidió a su representada durante más de 15 años, en un puesto sujeto a las consecuentes responsabilidades legales y convencionales que implica. Entre estas responsabilidades se encuentra la de rendir cuenta de su administración, mandato y gestión a la Asamblea de Socios de la Corporación, en relación a la marcha de la institución, sus estados financieros y ciertamente de todos los contratos que bajo su alero fueron suscritos por la Corporación.

Don Salvador Calera González ejerció su cargo hasta el día 15 de noviembre de 2018, fecha en la cual se eligió por los socios una nueva lista para asumir el Directorio de la Corporación. Sin embargo, y a pesar de haber ejercido por más de 15 años el cargo de presidente, don Salvador Calera jamás rindió cuenta alguna de su gestión, obligación que se mantiene vigente a la fecha, debiendo el Sr. Calera González rendir cuenta de su gestión al nuevo Directorio como ex Presidente de la Corporación y respecto del período que duró el ejercicio de su mandato.

En virtud de lo anterior, es que su representada dedujo, con fecha 08 de noviembre de 2019, una demanda en procedimiento sumario en la que se solicitó el Nombramiento de Árbitro para conocer de la referida Rendición de Cuenta, causa Rol C-32067- 2019, caratulada CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL UNIÓN ESPAÑOLA/CALERA, la cual se tramitó ante el 15° Juzgado Civil de Santiago. En dicho proceso, y mediante sentencia de fecha 03 de marzo de 2020, dicho tribunal determinó: 13. El árbitro S El árbitro Sr. Francisco del Rio Pacheco aceptó el cargo y prestó juramento de desempeñarlo fielmente mediante presentación de fecha 06 de abril de 2020 deducida ante el referido 15° Juzgado Civil de Santiago.

Así, se dio inicio a la tramitación del juicio de rendición de cuentas mediante Expediente Arbitral Rol N° 1-2020. Sin embargo, el Juez Árbitro declaró se declaró incompetente para continuar con la tramitación del procedimiento, indicando que correspondía, en forma previa y mediante un juicio declarativo de cuentas, se acreditase la existencia y alcance de la obligación de rendirla.



Con fecha 09 de septiembre de 2020, dio inicio a un juicio declarativo de obligación de rendir cuentas en procedimiento sumario, el cual se encuentra actualmente en tramitación ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-13.932-2020.

La resolución de los procedimientos anteriormente singularizados, y que actualmente se encuentran pendientes, tienen una conexión lógica necesaria con el juicio de marras, toda vez que el actor pretende cobrar honorarios por gestiones que estima que -sin perjuicio de una serie de inconsistencias de fondo que no vienen al caso en este momento- no le son oponibles al actual Directorio de la Corporación.

SEGUNDO: Que, la excepción formulada, será rechazada por cuanto de su sola formulación se advierte que no se cumplen los presupuestos de la litispendencia, de las que no escapa, la por conexidad.

En efecto, la jurisprudencia se ha pronunciado respecto a la litispendencia señalando que tiene la significación de juicio pendiente, esto es, de un juicio en el cual no hay sentencia de término, y en el que unas mismas partes han ejercitado unas mismas acciones y si bien la ley no ha definido expresamente lo que debe entenderse por "litispendencia", ni ha señalado los requisitos que deben cumplir los procesos para la procedencia de esta excepción, no obstante, puede sostenerse -como principio general- **que su fundamento radica en la necesidad de evitar la duplicidad de la actividad jurisdiccional**; impedir la dictación de fallos contradictorios. La voluntad de la ley es siempre mantener la continencia o unidad de la causa. Vela por ella, tanto al instituir la acumulación de autos como al establecer la excepción dilatoria de litispendencia. (C. Suprema, 7 julio 1951. R., t. 48, ó sec. 1, p. 264). **La excepción dilatoria de litispendencia tiene su origen en el principio de que no debe existir más de una relación procesal entre las mismas** personas y sobre el mismo objeto, y su finalidad es evitar una dualidad de sentencias sobre un mismo asunto y entre unas mismas partes, lo que, además de ser oneroso para ellas, conduce a una sentencia superflua e inútil, como tendría que ser la última de las que se dicten. (C. Suprema, 9 agosto í ú 1951. R., t. 48, sec. 1, p. 405).”.

Ahora bien, entre las dos causas incoadas por la demandada, en contra del anterior Presidente del Club Unión Española, no existe conexidad por cuanto el objeto de ambas es distinto al perseguido en autos y el demandante de autos no figura como parte en ninguno de los dos pleitos.

EN CUANTO A FONDO:



TERCERO: Que con su demanda de folio 1 el actor persigue que: **a)** Se condene a la Corporación Deportiva y Social Unión Española a pagar al Abogado Rodrigo Urrea Aguilera la suma de \$327.402.473.- (trescientos veintisiete millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos), equivalentes a los honorarios fijos adeudados y pactados a todo evento y al 15% a título de premio por los ahorros y/o beneficios económicos obtenidos por la Corporación por o a causa de los cuatro juicios ganados en el cobro de obligaciones tributarias con la Tesorería General de la República. Ello, más los reajustes e intereses correspondientes devengados hasta la fecha de su pago efectivo. **b)** Se condene expresamente a la Corporación Deportiva y Social Unión Española a pagar las costas de la causa.

Fundamenta su demanda en que con fecha 30 de octubre de 2013 se firmó un contrato de prestación de servicios entre la Corporación Deportiva y Social Unión Española, representada legalmente por don Salvador Calera González y su parte, en donde se establecen los cuatro juicios tributarios que se deben defender contra la Tesorería General de la República, los honorarios, la forma, plazos en que se pagaran y el tiempo que duraran dichas gestiones, además de otras cláusulas.

Agrega que se le otorgó Mandato Judicial para representar a la Corporación y con este poder se hizo parte en los tres primeros juicios que estaban notificados a esa fecha, ya que el cuarto de ellos aún no había sido notificado el cobro, en los cuales se alegó la nulidad de todo lo obrado por falta de notificación válida y en subsidio la excepción de prescripción de la de acción cobro de las obligaciones tributarias por parte de Tesorería, debido a que habían transcurrido más de 10 años sin que se ejerciera dicha acción.

Refiere a los juicios ganados contra Tesorería:

a) Cuaderno Administrativo N° 705-2005 por \$182.151.000.- . Notificación: 21-08-2009. Presentación: Nulidad y Excepción Prescripción 13-12-2013. . Estado: Acogida excepción prescripción, 18-06-2014. . Monto total: \$182.151.000.b) Cuaderno Administrativo N° 503-2008 por \$ 23.475.155.-. Notificación: 26-07-2013. Presentación: Nulidad y Excepción Prescripción 13-12-2013. . Estado: Acogida excepción prescripción, 23-09-2015/C-8250-2015. 17° J.C.S. . Monto total: \$23.475.155.- c) Cuaderno Administrativo N° 1073-2010 por \$ 18.315.000.-.Notificación: 26-07-2013. Presentación: Nulidad y Excepción Prescripción 13-12-2013. . Estado: Acogida excepción prescripción, 18-06-2014. . Monto total: \$18.315.000.- d) Cuaderno Administrativo N° 502-2009 por \$



1.758.742.002.-. Notificación: 11-10-2017. Presentación: Nulidad y Excepción de Prescripción 17-10-2017. Previo proveer: Acompañese Mandato actualizado 06-11-2017. Cumple lo ordenado: 13-11-2017. Da curso a escrito: 16-11-2017. Acogida a tramitación: 16-11-2017. Oficio al SII: 04-12-2017. Oficio a Tesorería: 04-01-2018. Resolución Tesorería: Se rechazan Excepciones, 26-07-2018. 1ª Demanda Juzgados Civiles: 23-08-2018/C-26302-2018. 10º J.C.S. Rechazo demanda: 31-08-2018. 2ª Demanda Juzgados Civiles: 03-09-2018/C-27402-2018 10º J.C.S. Rechazo demanda: 06-12-2018. Nulidad de todo lo obrado: 19-11-2018, Rol Corte 8669-2018. Nueva Notificación: 18-03- 2019. Presentación: Excepción Prescripción 26-03-2019, está en expediente. Revocación de poder: 28-03-2019, sin aviso ni notificación. Presentación nuevos abogados: Excepción Prescripción 29-03-2019. Estado: Acogida excepción prescripción, 19-08-2019, a pesar de la revocación de poder, Tesorería igual ordeno que se notificara la sentencia a esta parte, reconociendo el hecho de que siempre habían llevado todo el juicio y los juicios anteriores, y que habían presentado la excepción de prescripción antes, pero les habían revocado el poder al final cuando todo ya estaba definido para que se declarara la prescripción. Monto total: \$ 1.758.742.002.

Sostiene que Tesorería rechazó la acción de nulidad, pero acogió la prescripción en casi todos los cobros el año 2014, excepto los del cuaderno 503-2008, los cuales según establece la ley fueron remitidos a los Juzgados Civiles a fin que determinaran si existía prescripción, en la causa Rol C-8250-2015 del 17º Juzgado Civil de Santiago, el cual después de un análisis exhaustivo, en el año 2015 declaró en una muy completa y detallada sentencia, que todos los cobros estaban prescritos de ese expediente; misma situación sucedió con el cuaderno 502-2009, pero cuando fueron remitidos a los juzgados civiles, primero en la causa Rol C-26302-2018 del 10º Juzgado Civil de Santiago, no se cumplió con lo ordenado por el Tribunal y se decretó “tenerla por no presentada”; la segunda vez, Tesorería, en la causa Rol C-27402-2018 del 10º Juzgado Civil de Santiago, volvió a no cumplir con lo ordenado, en cuanto a acompañar físicamente el expediente y el Tribunal volvió a tenerla por no presentada. A esa altura, ya se había decretado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, por lo que no se continuó en sede civil, ya que no había discusión alguna de que todo estaba prescrito, tal como lo señala en la misma sentencia la propia Tesorería.

Indica que en el cuaderno administrativo 502-2009, este fue recién notificado el 11 de octubre del año 2017, asumiendo nuevamente la defensa, tal como está establecido en el contrato, para lo cual se les otorgó un Mandato



Judicial actualizado por requerimiento de la Tesorería, validando que el contrato de honorarios firmado por las partes, seguía plenamente vigente.

En esta oportunidad Tesorería procedió a embargar los dineros provenientes del Canal del futbol a la Sociedad Deportiva Unión Española S.A.D.P. en su calidad de continuadora legal de la Corporación, frente a lo cual, el 17 de octubre de 2017, volvió a representar a la Corporación y a alegar la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento y en subsidio la excepción de prescripción, ya que los juicios ganados antes, avalaban su teoría jurídica del caso; pero esta vez como había un embargo de por medio que ocasionaba un perjuicio directo y real a la Sociedad Deportiva Unión Española, ellos igual se hicieron parte y siguieron su teoría jurídica, alegando la nulidad de todo lo obrado y la prescripción, a lo que la Tesorería resolvió rechazar todo lo presentado y dejarlos fuera del juicio pero sin levantar el embargo y prosiguió con el procedimiento de apremio y la excepción de prescripción presentada por su parte, así que se presentó un Recurso de reposición con Apelación en subsidio.

Ante esta situación Unión Española, recurrió a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, la cual falló el 19 de noviembre de 2018, que nunca se había notificado válidamente ni a la Corporación ni a la Unión Española, ordenando que se deje sin efecto todo lo obrado hasta las fojas número 7, teniendo por notificada a la ejecutada en ese acto y ordenando que se notifique el cúmplase de la sentencia por el tribunal A Quo.

Paralelamente, la Tesorería había continuado con el procedimiento de cobro en el cuaderno de apremio y en los cuadernos de excepciones que se estaban tramitando, a lo cual resolvió que no había nulidad por existir notificación válida y que los cobros no estaban prescritos; ante esta resolución se le insistió a Tesorería que enviase los antecedentes a los Juzgados Civiles para discutir la prescripción, tal cual lo establece el procedimiento, ante los requerimientos Tesorería presentó la demanda, dos veces, pero sin formalizarla o acompañar los cuadernos administrativos cuando era apercibida por el tribunal, por lo que fueron declaradas por no presentadas.

Cuando se le hizo presente esta situación en Tesorería, se les informó que la Ilustrísima Corte de Apelaciones había fallado a favor y que se había declarado la nulidad de todo lo obrado porque no existía notificación válida de las partes; por lo que no había nada que revisar ni discutir y que se declarararía la prescripción de todos los cobros, así que le notificarían nuevamente para que presentaran las excepciones de nuevo.



Por lo cual el día 26 de marzo de 2019, después que se les notificó el 18 de marzo del mismo año, tal como les habían informado en la Tesorería, procedieron a interponer de nuevo las Excepciones de Prescripción, sabiendo que serían acogidas, tal como lo expresa claramente la Sentencia de Tesorería de fecha 19 de agosto de 2019.

Manifiesta que el nuevo Directorio de la Corporación elegido el 26 de noviembre de 2018, ya que ese mismo mes había renunciado el presidente anterior don Salvador Calera, y en su afán de atacar y desmerecer cualquier gestión realizada por la Directiva anterior, desconoció el contrato de prestación de servicios y sin dar ningún tipo de aviso, y al ver la posibilidad de arrogarse el éxito de haber logrado ganar el juicio tan importante y tan comentado en la colectividad española y así evitar el pago de los honorarios, indicando que eran personales y debían ser asumidos por la Directiva anterior, aprovechó la ocasión para revocar su poder en la causa y designar otros abogados, que sólo siguieron, casi al pie de la letra, todo lo que ya estaba hecho y así poder decir que ellos habían ganado el juicio y que esta su parte jamás había realizado ninguna gestión en ningún juicio y que nunca habían tenido poder en la causa y que para nombrarlos no se había realizado ninguna asamblea de socios, ya que el presidente no tenía facultades para nombrar ni contratar abogados.

Finalmente refiere que la nueva administración procedió a revocarle el poder el día 28 de marzo de 2019 y a designar nuevos abogados, quienes presentaron la Excepción de prescripción el día 29 del mismo mes, solicitando que no se considerara la presentación realizada antes.

CUARTO: Que, en su contestación los apoderados de la demandada alegan la prescripción de la acción y la falta de fundamento de la demanda, por cuanto fueron otros abogados los que la defendieron en Tesorería.

Indican que el juicio relativo al Cuaderno Administrativo N° 502-2009, seguido por la Tesorería General de la República contra la Corporación, concluyó mediante sentencia favorable a esta última por las gestiones de abogados distintos del Sr. Urrea, a quien, incluso, se le revocó su mandato y poder en la referida causa, procediendo a designarse nuevos abogados.

Respecto a la prescripción sostienen que el actor pretende el pago de supuestas obligaciones contraídas en virtud de la celebración de un contrato de honorarios que tenía por objeto la prestación de servicios profesionales del abogado del Sr. Urrea -demandante en la presente causa- y por ende las obligaciones que alega le son adeudadas provienen del ejercicio de una profesión



liberal de acuerdo a las palabras del Código Civil en su inciso segundo del artículo 2521, que dispone: “Prescriben en dos años los honorarios de jueces, abogados, procuradores; los de médicos y cirujanos; los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general, de los que ejercen cualquiera profesión liberal”.

Por tanto no cabe duda que el marco jurídico aplicable en relación a las obligaciones que el actor alega como incumplidas, es aquel dispuesto por el artículo 2521 recién transcrito, circunstancia que además fluye de la sola lectura del petitorio de su demanda, en el que solicita al tribunal “a) Condenar a la Corporación Deportiva y Social Unión Española a pagar al Abogado Rodrigo Urrea Aguilera la suma de \$327.402.473.- (trescientos veintisiete millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos), equivalentes a los honorarios fijados adeudados y pactados a todo evento y al 15% a título de premio por los ahorros y/o beneficios económicos obtenidos por la Corporación por o a causa de los cuatro juicios ganados en el cobro de obligaciones tributarias con la Tesorería General de la República. Ello, más los reajustes e intereses correspondientes devengados hasta la fecha de su pago efectivo.”

La excepción de prescripción extintiva abarca todas y cada una de las obligaciones que el actor estima incumplidas, por cuanto han transcurrido respecto de ellas el plazo de prescripción legal de 2 años, encontrándose entonces ya prescritas al momento de notificarse la presente demanda a la Unión Española, excepción que por sí sola basta para que – en caso de ser acogida- se rechace en su totalidad la demanda incoada en autos.

Destacan que el actor expone en su libelo que se le adeudan dineros por dos conceptos: el primero de ellos, por el honorario pactado a todo evento, respecto del cuaderno administrativo Rol 502-2009, ascendente a la suma de \$30.000.000.- en total; y, en segundo lugar, los honorarios por concepto del “premio” pactado, equivalente al 15% sobre el ahorro que significó para la Corporación el acogimiento de las excepciones de prescripción de las deudas tributarias, por un total de \$297.402.473.-, cifra que resulta de la operación aritmética de calcular el 15% del valor total de contingencia que, según informa en su demanda, correspondería a cada juicio, es decir, los Cuadernos Administrativos 705-2005, 503- 2008, 1073-20210, 502-2009.

Para efectos de orden, analizarán cómo la obligación de pago de estos honorarios se encuentra prescrito respecto de cada juicio, por cuanto desde ya advierten que para efecto de poder computar el plazo desde que las obligaciones



demandadas se hicieron exigibles y determinar si efectivamente se encuentran prescritas, hay que remontarse a las fechas en que fueron acogidas las excepciones de prescripción que el Sr. Urrea alega fueron diligentemente opuestas por él y por ende, desde que se verificó la exoneración para la Corporación del pago de los impuestos adeudados.

a. Cuaderno Administrativo 705-2005: Actor alega que el monto discutido era de \$182.151.000.-, por lo que el Sr. Urrea estaría demandando por concepto de premio de este juicio la suma \$27.322.650.-, es decir, el 15% del monto total discutido. La excepción de prescripción informa que fue acogida el 18 de junio de 2014, ergo, a la fecha de notificación de la presente demanda -el 17 de junio de 2021- esta obligación ya se encuentra prescrita.

b. Cuaderno Administrativo 503-2008: Actor alega que el monto discutido era de \$23.475.155.-, por lo que el Sr. Urrea estaría demandando por concepto de premio de este juicio la suma de \$3.521.273,25.- es decir, el 15% del monto total discutido. La excepción de prescripción informa que fue acogida el 23 de septiembre de 2015, ergo, a la fecha de notificación de la presente demanda -el 17 de junio de 2021- esta obligación ya se encuentra prescrita.

c. Cuaderno Administrativo N° 1073-2010: Actor alega que el monto discutido era de \$18.315.000.-, por lo que el Sr. Urrea estaría demandando por concepto de premio de este juicio la suma de \$2.747.250.- La excepción de prescripción informa que fue acogida el día 18 de junio de 2014, ergo, a la fecha de notificación de la presente demanda -el 17 de junio de 2021- esta obligación ya se encuentra prescrita.

d. Cuaderno Administrativo N° 502-2009: El actor alega que el monto discutido era de \$1.758.742.002., por lo que el Sr. Urrea calcula le corresponde \$263.811.300,3.- por concepto de premio. Adicionalmente, señala que respecto a este Cuaderno Administrativo se le adeuda además la suma total de \$30.000.000., por concepto de honorarios fijado a todo evento según el contrato de prestación de servicios celebrado con la Corporación; esto es, \$5.000.000.- al momento de la notificación que se le dio curso a la excepción de prescripción de las obligaciones tributarias de este Cuaderno Administrativo, y los \$25.000.000.- restantes serían pagados al momento de la notificación de la sentencia que dé término a las gestiones del referido Cuaderno Administrativo. Dado que el mismo Sr. Urrea alega antecedentes distintos relativos al presente cuaderno administrativo, los analizan con más detalle.



El actor persigue el pago de los honorarios en el Cuaderno Administrativo N° 502-2009, a pesar que reconoce que su poder le fue revocado en dicha causa, informando a este tribunal que con fecha 28 de marzo de 2019, se revocó su poder en el referido pleito, y un día después, con fecha 29 de marzo de 2019, nuevos abogados habrían asumido la defensa de la Corporación, oponiendo la excepción de prescripción en dicha causa.

Finalmente, y a efecto de enervar la acción de cobro de honorarios pretendido por el demandante respecto al Cuaderno Administrativo 502-2009, señalan que malamente puede su representada ser condenada a pagar honorarios al actor respecto de un juicio en que este no desarrolló las gestiones tendientes a llevarlo a estado de término ni tampoco colaboró sustancialmente para obtener una sentencia favorable para la Corporación. Veamos.

Con fecha 19 de agosto de 2019, se dictó sentencia en dicho Cuaderno Administrativo, donde puede advertirse que los abogados que dedujeron la excepción de prescripción en representación de Club Deportivo y Social Unión Española, fueron los señores Félix Antolín Martínez, Francisco Fuentes Valpuesta y Manuel Valdés Pacheco, es decir, en la misma sentencia se aprecia que el Sr. Urrea no ejerció la defensa judicial de la Corporación en dicho proceso.

Según han expuesto, una vez que se reanudó el proceso luego de haber sido declarado nulo por falta de emplazamiento por la Il.ª Corte de Apelaciones de Santiago mediante sentencia dictada en causa Rol 8669-2019, la Corporación a través de su nuevo directorio revocó el poder para actuar en el Cuaderno Administrativo 502-2009 del Sr. Urrea otorgando la defensa y representación judicial a los referidos nuevos abogados, quienes fueron los encargados a partir del día 28 de marzo de 2019 a continuar con la prosecución del juicio, realizar gestiones y trámites necesarios a fin de conseguir que este llegara a estado de sentencia, y específicamente obtuvieron una sentencia absolutoria para la Corporación: todas estas gestiones fueron realizadas por abogados distintos del Sr. Urrea.

QUINTO: Que son hechos no controvertidos de la presente causa, los siguientes: **a)** Que don Rodrigo Herman Urrea Aguilera, Abogado, fue contratado con fecha 30 de octubre de 2013 para la prestación de servicios a la Corporación Deportiva y Social Unión Española, representada legalmente por don Salvador Calera González; **b)** Que dichos servicios correspondían a la defensa de la demandada en cuatro juicios tributarios de la Tesorería General de la República; **c)** Que el demandante asumió la defensa en los cuadernos administrativos 705-



2005; 503-2008; 1073-2010; **d)** Que en Cuaderno Administrativo 502-2009 de Tesorería General de la República con fecha 28 de marzo de 2019 se revocó el patrocinio y poder al demandante. **e)** Que con fecha 28 de marzo de 2019 asumieron el patrocinio y poder de la demandada nuevos abogados en la causa antes indicada.

SEXTO: Que lo controvertido en la causa, es si el demandante prestó servicios en la causa administrativa 502-2009, por cuanto el actor señala que el presentó la defensa de la demandada, en tanto, la demandada sostiene que fueron otros abogados los que realizaron los servicios profesionales que llevaron a una sentencia favorable.

SEPTIMO: Que, quien tiene una pretensión y la hace valer en juicio debe acreditar fehacientemente los fundamentos de hecho en que esta se apoya, en la especie, el demandante, quien para acreditar sus asertos rindió las siguientes probanzas:

DOCUMENTAL:

Por el primer otrosí del libelo de folio 1: **1.-** Deudas Informadas por Tesorería 2013. **2.-** Certificado de deudas emitido por la Tesorería General de la República año 2015. **3.-** Escrito de Nulidad y Excepción Prescripción del Cuaderno Administrativo 503-2008 con timbre y fecha de la Tesorería General de la República, año 2013. **4.-** Sentencia Cuaderno Administrativo 503-2008 de Juicio a la Tesorería General de la República año 2015. **5.-** Escrito de Nulidad y Excepción Prescripción del Cuaderno Administrativo 705-2005 con timbre y fecha de la Tesorería General de la República, año 2013. **6.-** Sentencia Cuaderno Administrativo 705-2005 de Juicio ganado a la Tesorería General de la República, año 2014. **7.-** Escrito de Nulidad y Excepción Prescripción del Cuaderno Administrativo 1073-2010 con timbre y fecha de la Tesorería General de la República, año 2013. **8.-** Sentencia Cuaderno Administrativo 1073-2010 de Juicio a la Tesorería General de la República, año 2014. **9.-** Escrito de Nulidad, Excepción Prescripción, Cuaderno Administrativo 502-2009 de Juicio a la Tesorería General de la República, año 2017. **10.-** Resolución y notificación de cumple lo ordenado de Cuaderno Administrativo 502-2009. **11.-** Resolución y notificación que da curso a escrito de Cuaderno Administrativo 502-2009. **12.-** Resolución y notificación que acoge a tramitación las excepciones de Cuaderno Administrativo 502-2009. **13.-** Resolución y notificación que indica se ofició al Servicio de Impuestos Internos, Cuaderno Administrativo 502-2009. **14.-** Sentencia y notificación a esta parte de Cuaderno Administrativo 502-2009 de Juicio a la Tesorería General de la República. **15.-** Copia Contrato Prestación de Servicios.



16.- Mandato Judicial de la Corporación del año 2013. **17.-** Mandato Judicial de la Corporación del año 2017. **18.-** Carta rechazo de pago de honorarios y desconocimiento de gestiones realizadas. **19.-** Certificado nuevo Directorio, año 2019, con citación. **20.-** Resolución que eleva autos a Corte de Apelaciones. **21.-** Minuta deudas enviadas por la Sociedad Deportiva Unión Española S.A.D.P., año 2017. **22.-** Sentencia Corte Apelaciones que acoge la nulidad de todo lo obrado.

Con fecha 22 de octubre y a folio 39 acompañó los siguientes documentos: **1)** Contrato de prestación de servicios de honorarios. **2)** Mandato Judicial de la Corporación Deportiva y Social Unión Española del año 2013. **3)** Mandato Judicial de la Corporación Deportiva y Social Unión Española del año 2017. **4)** Magister en Gestión y Dirección Tributaria. **5)** Carta de honorarios pactada por los abogados del Colegio Sek y/o Unión Española S.A.D.P. **6)** Deudas Informadas por Tesorería 2013 por sobre los 1.700.000.000.- **7)** Certificado de deudas emitido por la Tesorería General de la República año 2015. **8)** Minuta de deudas tributarias enviadas por la Sociedad Deportiva Unión Española S.A.D.P. año 2017. **9)** Escrito de Nulidad y Excepción Prescripción del Cuaderno Administrativo 503-2008 con timbre y fecha de la Tesorería General de la República, año 2013. **10)** Sentencia Cuaderno Administrativo 503-2008. **11)** Cuaderno Administrativo 705-2005. **12)** Escrito de Nulidad y Excepción Prescripción del Cuaderno Administrativo 705-2005 con timbre y fecha de la Tesorería General de la República, año 2013. **13)** Sentencia Cuaderno Administrativo 705-2005. **14)** Cuaderno Administrativo 1073-2010 **15)** Escrito de Nulidad y Excepción Prescripción del Cuaderno Administrativo 1073-2010 con timbre y fecha de la Tesorería General de la República, año 2013. **16)** Sentencia Cuaderno Administrativo 1073-2010. **17)** Escrito de Nulidad, Excepción Prescripción, Cuaderno Administrativo 502-2009 de la Tesorería General de la República, octubre del año 2017. **18)** Resolución y notificación de cumple lo ordenado de Cuaderno Administrativo 502-2009. **19)** Resolución y notificación que da curso a escrito de Cuaderno Administrativo 502-2009. **20)** Resolución y notificación que acoge a tramitación las excepciones de Cuaderno Administrativo 502-2009. **14)** Resolución y notificación que indica se ofició al Servicio de Impuestos Internos, Cuaderno Administrativo 502-2009. **21)** Resolución que eleva autos a Corte de Apelaciones. **22)** Sentencia Corte Apelaciones que acoge la nulidad de todo lo obrado. **23)** Sentencia y notificación de Cuaderno Administrativo 502-2009. **24)** Ebook civil de causa Rol C-27402-2018 del 10° Juzgado Civil de Santiago. **24)** Contrato de prestación de servicios de honorarios firmado por el demandante y por el presidente y representante legal de la Corporación Deportiva y Social Unión Española. **25)** Sentencia Cuaderno Administrativo 503-2008. **26)**



Sentencia Cuaderno Administrativo 705-2005. **27)** Sentencia Cuaderno Administrativo 1073-2010. **28)** Sentencia y notificación a esta parte de Cuaderno Administrativo 502-2009.

A folio 40 con fecha 22 de octubre de 2021: **1)** 3 Correos electrónicos de fecha 6 de noviembre de 2017, entre don Salvador Calera y el actor **2)** 2 Correos electrónicos de fecha 26 de septiembre y 10 de octubre de 2019, entre don Salvador Calera y don Manuel Álvarez. **3)** 3 Correos electrónicos de fecha 13, y 18 de noviembre de 2013, entre don Salvador Calera y el actor. **4)** 2 Correos electrónicos de fecha 6 de noviembre de 2017, entre don Salvador Calera y el demandante. **5)** 2 Correos electrónicos de fecha 10 y 14 de octubre de 2019, entre don Manuel Álvarez, Tesorero de la nueva directiva de la Corporación, y el actor. **6)** 4 Correos electrónicos de fecha 11, 13, y 14 de noviembre de 2013, entre don Salvador Calera y el demandante. **7)** 1 correo electrónico de fecha 9 de enero de 2014, entre don Salvador Calera y el Sr. Urrea. **8)** 1 correo electrónico de fecha 24 de enero de 2014, entre don Salvador Calera y el demandante. **9)** 4 Correos electrónicos de fecha 15, 19 y 20 de noviembre de 2013, entre don Johnny Ashwell, Gerente General de Unión Española S.A.D.P. y/o Colegio Internacional SEK, usufructuarios del Estadio y continuadores del Club Unión Española, don Salvador Calera y el Sr, Urrea. **10)** 12 Correos electrónicos de fecha 9, 11 y 13 de diciembre de 2013 y 31 de marzo, 1 de abril, 8 de mayo, 24 de junio, 5 de julio y 5 de agosto de 2014, entre don Ignacio Melo, abogado de Unión Española S.A.D.P. y/o Colegio SEK, usufructuarios del Estadio y continuadores del Club Unión Española, y el Sr. Urrea. **11)** 8 Correos electrónicos de fecha 8 y 9 de septiembre de 2014 y 20, 21 de octubre y 6 de noviembre de 2015, entre don Ignacio Melo, abogado de Unión Española S.A.D.P. y/o Colegio SEK, usufructuarios del Estadio y continuadores del Club Unión Española, y el demandante. **12)** 2 Correos electrónicos de fecha 7 de enero de 2015, entre doña Mariela Mena, abogada de la Tesorería General de la República, sección Grandes Deudores y el actor. **13)** 5 Correos electrónicos de fecha 17 de marzo de 2015, entre doña Mariela Mena, abogada de la Tesorería General de la República, sección Grandes Deudores y el actor. **14)** 1 correo electrónico de fecha 4 de mayo de 2015, entre don Miguel López, Director Financiero de Colegio SEK y/o Unión Española S.A.D.P., usufructuarios del Estadio y continuadores del Club Unión Española, y el Sr. Urrea. **15)** 2 Correos electrónicos de fecha 16 de octubre de 2017, entre don Andrés Castiblanco, Abogado, Coordinador Jurídico en Chile de Colegio Internacional SEK y/o Unión Española S.A.D.P., usufructuarios del Estadio y continuadores del Club Unión Española, y el actor. **16)** 4 Correos electrónicos de fecha 17 de octubre de 2017, entre don Andrés Castiblanco, Abogado,



Coordinador Jurídico en Chile de Colegio Internacional SEK y/o Unión Española S.A.D.P., usufructuarios del Estadio y continuadores del Club Unión Española, y el demandante. **17)** 2 Correos electrónicos de fecha 25 de enero de 2018, entre don Andrés Castiblanco, Abogado, Coordinador Jurídico en Chile de Colegio Internacional SEK y/o Unión Española S.A.D.P., usufructuarios del Estadio y continuadores del Club Unión Española, y el Sr. Urrea. **18)** 2 Correos electrónicos de fecha 12 de diciembre de 2018, entre don Salvador Calera y el Sr. Urrea.

OCTAVO: Que a su turno, la parte demandada rindió prueba documental, testimonial y confesional.

DOCUMENTAL:

A folio 37 con fecha 22 de octubre de 2021 acompaña los siguientes documentos: **1.** Carta de fecha 06 de abril de 2018, dirigida por Salvador Calera, en su calidad de Presidente de la Corporación Deportiva Unión Española, a don Severo Marino Gil; **2.** Copia del Cuaderno de Excepciones del Expediente administrativo Rol 502-2009, de la Tesorería Regional Metropolitana, caratulado Fisco con Unión Española, en su tramitación solo hasta el 03 de agosto de 2018; **3.** Copia de E-book o expediente digital tramitado ante la Illtma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol ingreso Civil-8669-2018, caratulado “Fisco con Unión Española”; **4.** Copia de Acta de Reunión de Directorio Club Deportivo y Social Unión Española de fecha 26 de diciembre de 2018, suscrita por sus asistentes don José Marino Conde, Paula Álvarez Sánchez, Manuel Álvarez Nieto, José Villar Suárez, Valentín Beperet Antolín, José Valencia Castañeda, Enrique Villadangos Frankovich, y sus invitados Cristian Vizcaya y Patricio González; **5.** Carta de fecha 24 de enero de 2019, dirigida por don Luis Baquedano Quezada, en su calidad de Gerente General de Unión Española S.A.D.P, a los señores Salvador Calera González y José Alfonso Lobato Jiménez; **6.** Copia de Acta de Reunión de Directorio Club Deportivo y Social Unión Española de fecha 30 de enero de 2019, suscrita por sus asistentes don José Marino Conde, Paula Álvarez Sánchez, Manuel Álvarez Nieto, José Villar Suárez, Valentín Beperet Antolín, José Valencia Castañeda, Enrique Villadangos Frankovich, y sus invitados Cristian Vizcaya, Patricio González y Vinko Agüero; **7.** Copia de Escritura pública de fecha 30 de enero de 2019, suscrita ante el Notario Público don Andrés Rieutord Alvarado, y anotada bajo el Repertorio N° 3393-2019, de mandato judicial de Club Deportivo y Social Unión Española a Ariela Agosin y otros; **8.** Copia autorizada de escritura pública de fecha 19 de marzo del año 2019, suscrita ante el Notario Público don Andrés Rieutord Alvarado, y anotada bajo el Repertorio N° 8434-2019, en la que consta la revocación por parte de Club Deportivo y Social Unión



Española, del mandato judicial otorgado a don Rodrigo Urrea Aguilera; **9.** Copia autorizada de Escritura pública de fecha 21 de noviembre de 2013 suscrita ante el Notario Público don Eulogio Baeza Gutiérrez, anotada bajo el Repertorio 1311-13, que se refiere a mandato judicial otorgado por el Club Deportivo y Social Unión Española a don Rodrigo Urrea Aguilera; **10.** Copia de la primera hoja del Escrito presentado por los abogados Félix Antolín, Francisco Fuentes Valpuesta y Manuel Valdés Pacheco, en Expediente Administrativo Rol N° 502-2009;. **11.** Copia de la resolución de fecha 29 de marzo de 2019, recaída en el escrito singularizado en el punto anterior, firmado por Mario Fuentes Espinoza, Juez Sustanciador en el Expediente Administrativo N° 502-2009, de la Tesorería Regional Metropolitana; **12.** Sentencia de fecha 19 de agosto de 2019, dictada en Expediente Administrativo N° 502-2009, de la Tesorería Regional Metropolitana; **13.** Carta de fecha 17 de octubre de 2019, dirigida por don José Marino Conde, Presidente del Directorio del Club Deportivo y Social Unión Española, a don Rodrigo Urrea Aguilera; y, **14.** Copia de E-Book o expediente digital de procedimiento sumario de declaración de obligación de rendir cuenta.

Asimismo reitera los siguientes documentos aportados con fecha 19 de agosto de 2021, que consta a folio 21 y que corresponden: **1.** Copia autorizada de escritura pública de fecha 17 de junio de 1998, suscrita en la Notaría Pública de Santiago de doña Laura Andrea Galecio Pesse, y anotada bajo el repertorio N° 2.107.-; **2.** Copia autorizada de escritura pública de fecha 26 de junio de 2002, suscrita ante la Notario Público Titular de la 42° Notaría Pública de Santiago, doña María Gloria Acharán Toledo, y anotada bajo el Repertorio N° 11.508.-; **3.** Copia de contrato de promesa de compraventa de acciones, de constitución de usufructo y de opción de compra, de fecha 25 de abril de 2008, celebrada mediante instrumento privado con firmas autorizadas ante el Notario Público don Álvaro Bianchi Rosas, Titular de la 11° Notaría de Santiago; **4.** Copia de escritura pública suscrita ante el Notario Público Titular de la 22° Notaria de Santiago, don Humberto Santelices Narducci, bajo el Repertorio N° 4423-2008, de fecha 01 de agosto de 2008, por la que se celebra el contrato de compraventa de las acciones que la Corporación y don Salvador Calera tenían, a dicha fecha, en la Sociedad Deportiva, en favor de SEK; **5.** Copia autorizada de escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2018, suscrita en la 1° Notaria Pública de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, y anotada bajo el Repertorio N° 20.593/2018.-, en la cual consta la elección del nuevo Directorio de la Corporación; **6.** Copia autorizada de escritura pública de fecha 02 de enero del año 2019, suscrita ante el Notario Público Titular de la 29° Notaría Pública de Santiago, don Raúl Undurraga Laso, y anotada bajo el Repertorio N° 12-19, en la que consta la ratificación del nuevo



Directorio de la Corporación; **7.** Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin fines de lucro relativo a la Corporación, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en donde consta la individualización de los actuales miembros del Directorio de nuestra representada; **8.** Copia de carta enviada a don Salvador Calera González, en su calidad de Presidente saliente de la Corporación, y don Alfonso Lobato Jiménez, de fecha 07 de enero de 2018; y, **9.** Copia de resolución de fecha 28 de julio de 2020, dictada por Juez Árbitro don Francisco Del Río Pacheco, en juicio arbitral caratulado “Club Deportivo y Social Unión Española con Salvador Calera González”, Rol Arbitral N° 1-2020.

TESTIMONIAL: A folio 63 con fecha 14 de diciembre de 2021, declara el testigo don Valentin Antonio Beperet Antolin.

CONFESIONAL: A folio 71 con fecha 28 de marzo de 2022 comparece don RODRIGO HERMAN URREA AGUILERA, quien responde las preguntas contenidas en el pliego de posiciones acompañado por la demanda a folio 72.

EN CUANTO A LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION:

NOVENO: Que en el párrafo 4° del Título XLII del Código Civil, denominado De la Prescripción, que se refiere a ciertas acciones que prescriben en corto tiempo, se dispone en el inciso 2° del artículo 2521 que **prescriben en dos años los honorarios de jueces, abogados,** procuradores, los de médicos cirujanos; los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general, de los que ejercen cualquier profesión liberal. Más adelante, en su artículo 2523 se agrega que las prescripciones mencionadas en los dos artículos precedentes se interrumpen: 2° desde que interviene requerimiento, y que sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2515. Por su parte, el artículo 2518 del mismo Código señala que la prescripción que extingue las acciones ajenas se interrumpe civilmente por la demanda judicial, debidamente notificada como se expresa en el artículo 2503 del Código Civil;

DECIMO: Que, como se observa de la normativa citada, es claro que para la ley el único hecho que tiene la virtud de interrumpir la prescripción extintiva, perdiendo el deudor el tiempo transcurrido, es la demanda judicial.

Ahora bien, de acuerdo a lo resuelto en forma reiterada y permanente por la Excm. Corte Suprema, “la correcta interpretación del inciso segundo del artículo 2503 del Código de Bello, debe notificarse válidamente. Es decir, no basta la mera presentación de la demanda para interrumpir la prescripción, sino que esta debe



ser notificada al deudor y la notificación ha de cumplir los requisitos establecidos en la ley para producir el efecto antes anotado.”.

Sostiene nuestro más Alto Tribunal que “lo anterior se aviene con la interpretación armónica de los artículos 2503 y 2518 del Código Civil, puesto que no se interrumpe la prescripción si la notificación de la demanda no se ha realizado conforme a derecho, menos puede entonces interrumpirse cuando no se ha notificado de ninguna forma. Esta ha sido la opinión de la mayoría de los autores, manifestada además en los diversos fallos de los tribunales del país: “La prescripción extintiva solo se interrumpe civilmente por la demanda judicial debidamente notificada dentro del lapso de tiempo respectivo, ya que si, conforme al artículo 2503, la demanda ilegalmente notificada no interrumpe la prescripción, menos puede interrumpirla cuando no está notificada de ninguna forma”.

Por tanto –continúa–, debe acogerse la prescripción extintiva si el plazo había vencido al tiempo de notificarse la demanda, aunque esta hubiese sido presentada antes de vencerse el plazo’ (C. La Serena, 7 de octubre 1910, R, t.9, sec 1°, p.516).

En este mismo sentido se ha expresado: “La prescripción extintiva no puede entenderse interrumpida por la demanda, si la notificación de esta no se hace en la forma legal, antes de vencer el respectivo plazo de prescripción. Por tanto, para que la demanda interrumpa la prescripción de cuatro años de la acción derivada del delito o cuasidelito, es necesario que se notifique aquélla antes de expirar dicho plazo” (C. Suprema, 20 de julio de 1938. R. t.36, sec. 1°, p. 118).

Asimismo, tal conclusión resulta acorde y permite dar aplicación a otras instituciones que se relacionan con la prescripción y que se encuentran íntimamente ligadas a la interrupción, como es el caso de la renuncia, sea tácita o expresa, entendiendo que resulta procedente solo cuando ha transcurrido íntegramente el plazo que extingue la acción sin que aquel que tiene derecho a alegarla se aproveche de ella, consolidándose de esta manera el derecho del acreedor.

Para la Primera Sala, de nuestra Excma. Corte Suprema, “solo a partir de la fecha de la notificación válida de la demanda debe considerarse que esta produjo sus efectos, sustantivos o de fondo y adjetivos o procedimentales que el ordenamiento jurídico atribuye a este acto jurídico procesal, contemplándose entre los primeros, por lo relevante para este caso, la eventual interrupción civil del término de prescripción extintiva o liberatoria que había principiado a correr desde la exigibilidad de la obligación. Sin embargo, en la situación específica, a la época



del emplazamiento legal de la demandada que alegó la prescripción el término estatuido por la ley había transcurrido con creces”.

Agrega el fallo citado, “En efecto, la obligación de que se trata consiste en el pago de honorarios derivados de la ejecución de un mandato que terminó antes de la ejecución total de las gestiones encomendadas, al serle revocado mediante escritura pública de 17 de agosto de 2017, lo que le fue notificado mediante carta certificada que recibió el demandante el 21 de agosto de 2017, fecha desde la cual a la de notificación de la demanda de autos a la demandada que alegó la prescripción, ya habían transcurrido los dos años que el inciso primero del artículo 2521 del Código Civil para estos efectos establece”.

El fallo consigna: “Que en apoyo de lo concluido existen diversas razones de doctrina, las que se sustentan en el Derecho Romano, que en el derecho formulario se da origen a la relación que vincula a las partes con motivo de la litis contestatio, la cual con diferentes adecuaciones se mantiene hasta nuestros días, en que precisamente surge la relación procesal entre las partes y de estas con el juez. De esta forma la relación procesal se origina en el momento en que la pretensión extraprocesal, real o presuntamente resistida por el deudor, es acogida a tramitación por el tribunal y puesta en conocimiento del demandado. Dicho planteamiento indica que la única forma en que una demanda constituye o da origen a un proceso es por medio del conocimiento cierto de ella por el demandado, no resultando posible fijar ninguna vinculación para este último con anterioridad, salvo que el legislador expresamente autorice a proceder sin su conocimiento en casos graves y urgentes; actuaciones que una vez realizadas inmediatamente se le ponen en conocimiento”.

“Que explicando las razones por las cuales se hace necesaria la notificación de la demanda para que se produzca el efecto de interrumpir la prescripción, el autor Ramón Meza Barros (‘Memoria de Prueba sobre Interrupción de la Prescripción Extintiva Civil’ pág. 42), señala: ‘La necesidad de este requisito, dice Giorgio, surge de los principios generales, porque la prescripción no obra de persona a persona, y por lo tanto, supone notificación. La necesidad de que la demanda sea notificada se desprende, también, de los principios procesales que exigen que toda demanda sea notificada para que produzca los efectos que le son propios. Prueba de ello es que antes de notificada una demanda al reo, podrá el actor retirarla sin más trámite y se considerará como no presentada. Es necesaria también la notificación de la demanda, porque la interrupción de la prescripción por obra del acreedor supone un juicio y este no se concibe sin tal notificación. La necesidad de que la demanda se notifique resulta, en fin, y muy especialmente,



del texto del núm. 1°. Artículo 2503, según el cual no hay interrupción 'si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal', lo que supone, lógicamente, una notificación que interrumpirá la prescripción, cuando ha sido practicada correctamente",

"Que a todo lo anterior se une el antecedente que diferencia al instituto de la prescripción del de la caducidad, ambas sanciones a la inactividad del acreedor, pero que se interrumpen: la primera, con la presentación de la demanda y la correspondiente notificación y la segunda, que no requiere este último acto. Por ello es que sus efectos se producen al completar las actuaciones que constituyen cada una de las interrupciones, la prescripción al concluir con la notificación de la demanda y la caducidad solamente al interponer la acción", explica.

"Que por todo esto no es posible retrotraer los efectos de la notificación a la fecha de interposición de la demanda, puesto que cualquier determinación en este sentido que importe reconocer eficacia retroactiva a la notificación ha debido declararla así el legislador, en atención a que la normalidad de los efectos es que ellos se consideren desde su realización", afirma el fallo.

Por tanto, para el máximo tribunal: "(...) así las cosas, la correcta interpretación de las normas que regulan el estatuto de la prescripción es aquella que postula que es la notificación judicial de la demanda efectuada en forma legal la que provoca el efecto de impedir que se complete el plazo de que se trata, porque pretender que es la sola presentación del libelo, pero supeditada a su notificación judicial posterior, significaría, en primer lugar, que quedaría al arbitrio del demandante la determinación de la época en que la interrupción se consolidara, lo que solo se verificaría cuando decida que se lleve a cabo la notificación, con intervención del ministro de fe competente".

UNDECIMO: Que, en el caso de autos es un hecho pacífico entre los litigantes que en Cuaderno Administrativo 502-2009 de Tesorería General de la República **con fecha 28 de marzo de 2019 se revocó el patrocinio y poder al demandante.**

Asimismo no es controvertido por las partes, que los otros cuadernos administrativos de Tesorería en los cuales el actor prestó servicios profesionales para la demandada habían terminado con anterioridad a dicha fecha.

Ahora bien, consta de folio 13, **que con fecha 17 de junio de 2021 se notificó la presente demanda al demandado.**



« C-11040-2020»

En consecuencia, desde la fecha en que se hicieron exigibles los honorarios demandados en autos, 28 de marzo de 2019, a la fecha en que se notificó la demanda, 17 de junio de 2021, transcurrió en exceso el bienio que establece el artículo 2521 inciso 2° del Código Civil, para declarar la prescripción, por lo que la defensa formulada será acogida.

DUODECIMO: que atendido lo concluido precedentemente se omitirá pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

DECIMO TERCERO: Que los demás antecedentes del proceso, no alteran lo precedentemente concluido.

Y, visto, además lo dispuesto en los artículos 1437 y siguientes, 1545 y siguientes, 1698 y siguientes del Código Civil, 140, 160, 169, 170, 254 y siguientes, 341 y siguientes, y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción dilatoria de litispendencia formulada a folio 21 con 19 de agosto de 2021.

II.- Que se acoge la excepción de prescripción opuesta a folio 22 el 19 de agosto de 2021.

III.- Que en consecuencia, se rechaza la demanda de folio 1 en todas sus partes.

IV.- Que no se condena en costas al actor por estimar que ha tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese y archívese.

Rol N°11040-2020

**DICTADA POR DOÑA LILIAN LIZANA TAPIA, JUEZ SUPLENTE Y AUTORIZA
DON MARIO ROJAS GALLEGUILLOS SECRETARIO SUBROGANTE**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiuno de Septiembre de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PXVXBEMEFL